

Política y liberalismo conservador a través de las editoriales de la prensa tradicional en los años '70 y '90¹

Mariana Heredia*

Introducción

Invitados ineludibles en las ambiciosas perspectivas estructuralistas latinoamericanas, “la derecha” y los grupos que detentan el poder económico y social son, paradójicamente, uno de los objetos menos estudiados de la región.

En la Argentina, tras los análisis sobre los conservadores de la generación del '80 y los nacionalistas de los años '30, muy poco es lo que sabemos sobre los sectores privilegiados de la sociedad. La creciente complejización de los grupos que ocupaban y ocupan los peldaños superiores en la distribución del prestigio y la riqueza no logró despertar la atención del mundo académico. Con honrosas excepciones, sociólogos e historiadores han delegado este problema en economistas. Éstos, empeñados en la caracterización de la estructura y dinámica económica, han permitido identificar un conjunto de unidades productivas y estrategias de acumulación convergentes dejando de lado, sin embargo, el análisis de dimensiones igualmente relevantes como lo son el estudio de su cohesión interna, de los actores corporativos que los representan y, sobre todo, de sus orientaciones políticas e ideológicas.

Dentro de las ciencias sociales, la indiferencia frente a estos aspectos se explica por el predominio de concepciones que, capaces de repensar la especificidad del capitalismo periférico, postularon la existencia de intereses “objetivos” dentro de las clases que debían conducir el desarrollo. Al mismo tiempo, los análisis de historia intelectual rara vez traspasaron las primeras décadas del siglo XX. Sus cultores se sintieron más atraídos por las producciones eruditas de los padres fundadores y sus tempranos críticos que por el compromiso de las diversas tradiciones políticas con la interpretación de coyunturas

* Socióloga, Universidad de Buenos Aires. Actualmente becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

más recientes, compromiso, claro está, que terminó por actualizar y redefinir el contorno de cada una de ellas. Como consecuencia, el estudio de las prácticas de la burguesía y el estudio de las ideas políticas marcharon paralelos sin encontrarse.

Nuestras reflexiones reposan en hipótesis distintas: suponemos que ni las ideologías son reflejo de los grupos sociales, ni los intereses económicos y políticos son directamente percibidos por los actores. En tanto las clases no se circunscriben únicamente a atributos socioeconómicos comunes, requieren para expresarse en la esfera pública de portavoces que decodifiquen la realidad, superen las diferencias que palpitan en su seno y definan sujetos con experiencias y reclamos coincidentes. En este sentido, la productividad del campo intelectual (espacio que involucra tanto la literatura excelsa como las producciones más triviales) radica en su voluntad de comprender, defender o transformar las circunstancias que lo contienen.

Tal como afirmara Romero (1998: 9), si se concibe el estudio de las ideas políticas como exposición de un pensamiento doctrinario, tal vez el análisis del caso argentino y latinoamericano no mereciera mayor atención. En efecto, la reflexión original y vigorosa en materia política ha sido excepcional en el continente. Lo más fecundo es, en este contexto, entender las ideas no ya como matriz filosófica pura sino como "conciencia de una actitud y motor de una conducta", como mapa cognitivo que reduce la complejidad y establece las coordenadas de lo posible y lo deseable. Asimismo, el discurso político latinoamericano es y ha sido siempre tributario de fuentes extranjeras, empero les ha forjado matices que constituyen de por sí un indicio cultural de profunda significación. Finalmente, un discurso sólo puede arraigar y tornarse predominante si cuenta, además de con recursos materiales para imponerse, con defensores y clivajes ideológicos locales.

Sin duda, América Latina, y la Argentina en especial, han sufrido profundas transformaciones en las últimas décadas. El modelo de acumulación, el régimen de gobierno, las identidades sociales y políticas, han cambiado radicalmente. En este derrotero, el liberalismo conservador ha pasado de las márgenes a la hegemonía, secundando discursivamente lo que algunos autores consideran una "revolución conservadora". En los años '70, este discurso estaba a la defensiva frente a una sociedad movilizadora en la cual ciertos sectores pretendían no ya distribuir más igualitariamente las riquezas del país sino cuestionar las bases mismas de la organización social. Veinte años más tarde, sus postulados han sido obedecidos aún por sus antagonistas de ayer, sembrando apoyo incluso en los sectores más perjudicados.

Tanto la reacción frente al peligro (en el pasado) como la legitimación del nuevo orden y sus privilegios (en la actualidad) precisan sujetos aptos para interpretar información, identificar contendientes y proponer estrategias de resistencia e invalidación. En este caso, el valor que reviste el discurso político no reside tanto en la definición puntual de sus contenidos y contornos cuanto en el carácter dialógico, mutuamente referencial de su cambiante constitución. Así, la riqueza de los debates ideológicos radica en que no se limitan a

interpelar a los sectores directamente beneficiados o perjudicados por determinados sucesos, sino que suponen el despliegue de argumentos destinados a trascender los intereses particulares y persuadir a un auditorio amplio.

En este trabajo nos proponemos reconstruir y comparar las tramas argumentales con que un conjunto de formadores de opinión vinculados con el pensamiento liberal conservador argentino se han pronunciado frente a los principales conflictos sociales y políticos que atravesaron el país en los años '70 y '90 a través del modo en que caracterizaron a sus principales protagonistas y reclamos. Ante un escenario social y político sustancialmente diferente, y situado el liberalismo conservador en una posición de poder distinta, nos interesa evaluar la similitud, o bien las divergencias, en los argumentos esgrimidos a la hora de impugnar los discursos y prácticas de quienes desafiaban y desafían con sus demandas el orden que el liberalismo propone y defiende. Nos anima la convicción de que, sin el análisis del vínculo entre relaciones discursivas y relaciones de poder, las ciencias sociales corren el riesgo de sucumbir ante teorías conspirativas insensibles a la producción de sentido que acompaña todo proceso económico y político. Como postulara Hall (1998: 4), si bien el consentimiento no se mantiene y construye sólo a través de mecanismos ideológicos, consentimiento e ideología no pueden ser disociados.

El artículo está organizado en cuatro secciones. La primera se aproxima a las características generales del discurso liberal conservador argentino e introduce a los enunciadores seleccionados. La segunda se centra en el primer período histórico, los años setenta, y se divide a su vez en dos apartados. Inicialmente proponemos algunas notas contextuales sobre la evolución política y los conflictos paradigmáticos de la Argentina entre 1969 y 1976, y seguidamente abordamos un análisis de los editoriales que intentaron comprender y solucionar la crisis de dominación. La tercera parte se dedica al examen de las transformaciones económicas, sociales y políticas durante los años '90, y se estructura de un modo semejante al de la sección anterior: primero una breve síntesis histórica, luego el estudio de los textos. Si bien nuestro marco teórico recomendaría combinar el análisis histórico y el discursivo, nos inclinamos por esta opción expositiva convencidos de que facilitará la comprensión de todo lector poco familiarizado con la realidad argentina aquí abordada. El cuerpo del artículo remite profusamente a notas al final del texto. La voluntad por revelar nuestras fuentes y apoyaturas bibliográficas y por aclarar sucesos que intuimos no del todo conocidos, nos alentó a emplear esta herramienta con insistencia. Esperamos, en ambos casos, que las estrategias escogidas sirvan a los propósitos que las inspiraron. En cuarto y último lugar, proponemos algunas conclusiones sobre la política y el liberalismo conservador.

El discurso liberal conservador

Marsal (1972) escribió alguna vez que estudiar la derecha es un ejercicio masoquista. Tenía la certeza, por entonces, de que su trabajo no tendría nunca buena acogida. Aquellos calificados como miembros de este pensamiento

han considerado con frecuencia que la dicotomía derecha-izquierda es algo superado y que, como parte de una “lengua muerta”, sólo es hablada por quienes tiñen sus afirmaciones de “vulgata ideológica”. Para muchos de quienes se ubican en el otro extremo del espectro político, su análisis es estéril. Los discursos de la derecha son o ejercicios de manipulación o mera expresión de los intereses económicos de las clases privilegiadas.

Además del rechazo al que es condenado el examen de la derecha por parte de quienes participan de los debates ideológicos de su tiempo, la ingratitud de semejante tarea se acrecienta por los obstáculos estrictamente conceptuales que enfrenta, para el caso argentino, un análisis de esta naturaleza. ¿A qué nos referimos con este término? ¿Qué vínculo existe, en el caso que nos ocupa, entre liberalismo conservador y derecha? O más radicalmente, ¿es lícito emplear estas nociones para el análisis de la política y la ideología en la Argentina?

Puede considerarse al liberalismo de las luces como la fuente de todas las expresiones ideológicas de la política contemporánea. Eccleshall (1993) ha propuesto distinguir en él tres grandes pilares: la defensa de la libertad individual; la articulación entre libertad económica, progreso social y propiedad privada; y la necesidad de un orden administrativo eficiente destinado a promover la autodisciplina y el respeto mutuo entre los ciudadanos. La imagen de sociedad que subyace al liberalismo es la de una comunidad uniclasista de individuos igualmente racionales y capaces de gestionar los asuntos políticos y económicos. Esta común humanidad a la que son reductibles todos los hombres garantiza (librada a sus propios impulsos) la armonía de intereses en la sociedad. El primer liberalismo esgrimió una serie de argumentos en contra del poder absoluto de la monarquía y bregó por la secularización y el respeto de las libertades políticas. Su carácter revolucionario engendró primero la independencia de los Estados Unidos y alcanzó a los criollos latinoamericanos tras la Revolución Francesa.

Por su parte, el conservadurismo moderno surgió como reacción a los “excesos” de la Revolución de 1789. Frente a la confianza iluminista en la razón, contrapuso la experiencia y la pericia de las élites. Ante el juicio filosófico y el pensamiento utópico, enfatizó la importancia de la herencia y el respeto al pasado. De cara a las transformaciones radicales, reivindicó el pragmatismo, la prudencia y la moderación. En este caso, la concepción de sociedad se asemeja a un cuerpo en el cual cada parte posee derechos y deberes específicos para con la colectividad. Desde esta perspectiva, la desigualdad de los seres humanos es insoluble y sólo la moral y la religión pueden garantizar el vínculo entre las partes.

Con el correr del tiempo, la tradición liberal y la conservadora tendieron a converger en una serie de aspectos. Ambas reconocieron las ventajas de la economía libre de mercado, aunque la segunda se inclinó por cierto paternalismo benefactor. En los dos casos, se recurrió al entramado institucional (económico y político) legado por la fundación constitucional como marco que contiene y limita las demandas de los distintos componentes de la sociedad.

Esta afinidad es aún más tangible en el caso argentino. Sabemos que la construcción del Estado nacional y la temprana inserción del país en el merca-

do mundial estuvieron estrechamente ligadas con la consolidación de un grupo dirigente que adscribía a los principios del liberalismo. La peculiaridad de la tradición liberal argentina reside, desde entonces, en su temprana convivencia con el conservadurismo, fenómeno que le restó gran parte del vigor y perdurabilidad que caracterizaron a corrientes del mismo signo en otras naciones del continente². En efecto, se ha asignado con frecuencia a la generación patricia de fines de siglo XIX y principios del XX los rasgos de una oligarquía. Sus herederos conservaron la creencia en una sociedad estratificada y meritocrática y expresaron asiduamente un desdén de corte elitista hacia “las masas”.

En las primeras décadas del siglo XX, el radicalismo intentó mantener los principios del librecambismo en lo económico, profundizando el carácter liberal y democrático de las instituciones políticas. No obstante, la participación de otros sectores en la conducción del Estado primero, y la crisis del modelo agroexportador después, disolvieron el consenso liberal conservador. A partir de los años '30, el mismo sector social que había enarbolado al liberalismo alentó la emergencia de otras estrategias de intervención política (los golpes de estado) y económica (el creciente protagonismo estatal) y la proliferación de otras corrientes ideológicas (especialmente, el nacionalismo).

Hasta los años '30, puede pensarse que confluyeron las tres definiciones que habitualmente se asignan al discurso de derecha: la defensa del orden establecido y la representación de los sectores privilegiados de la sociedad, la prioridad otorgada a la libertad por sobre la igualdad, y la expresión de ambos elementos en un sistema ideológico relativamente coherente, el liberalismo conservador.

Desde entonces, la derecha no pudo, excepto en casos minoritarios, cristalizar en el sistema de partidos. Mientras el radicalismo conservó predicamento entre las capas medias y el peronismo interpeló a los sectores populares, los intelectuales de la derecha mantuvieron una actitud complaciente, si no militante, con la intervención política de las fuerzas armadas.

Es complejo preguntarse por la existencia de una derecha luego de 1955. Evidentemente, siguió habiendo sectores económicos privilegiados y, sin duda, éstos siguieron defendiendo ciertos principios básicos de la organización social (entre ellos, la propiedad privada y la adscripción de la Argentina al “mundo occidental”). La cuestión es que, más allá de su rechazo por el populismo, de cuyo eclecticismo ideológico el liberalismo conservador no participó hasta los años '90, no volvió a existir durante décadas un programa de acción capaz de aglutinar y orientar a quienes se encontraban en los peldaños superiores de la estructura social. Una porción significativa de la gran burguesía nacional y extranjera parece haber sustentado un liberalismo difuso y defensivo, coincidencia que no alcanzó a superar las profundas contradicciones que la atravesaban³.

Por su parte, los intelectuales de la derecha estuvieron ausentes, durante décadas, de los dos ámbitos de universalidad por excelencia. Ni la política nacional, donde los partidos liberal-conservadores fueron erráticos e ineficaces, ni la universidad, cuyos claustros se poblaron de capas medias, de intelectua-

les progresistas o, circunstancialmente, de acólitos del nacionalismo reaccionario, fueron usinas ideológicas aptas para pensar la Argentina "desde arriba". La misión de representar las acciones de quienes se encontraban en los peldaños superiores de la estructura social recayó sobre el particularismo de las corporaciones empresarias y los llamados impotentes de la prensa liberal. En el primer caso, las discusiones se tornaron pedestres, destinadas casi con exclusividad a la defensa de intereses privados y a la disputa por prebendas estatales. En el segundo, un conjunto de intelectuales se esforzó ya no por bregar por un modelo de sociedad que había quedado vacante, sino al menos por mantener como arma y refugio los principios que consideraban fundantes de la nación.

Las fuerzas armadas sirvieron de instancia hegemónica sustitutiva. Sus recurrentes intervenciones, sin embargo, actuaron hasta 1976 más como poder moderador o arbitral que como dispositivo de resolución de las contradicciones sociales que les daban origen. Al politizarse, las instituciones castrenses terminaron padeciendo las mismas tensiones que desvelaban a los gobiernos civiles.

Tras el derrumbe del populismo a mediados de los '70 y la profunda redefinición de las condiciones sociales y económicas que le habían servido de apoyo, el liberalismo conservador fue ganando prédica y logró ubicarse como única alternativa al régimen de intervención estatal agonizante. Lejos de debilitarlo como opción, el fracaso económico del plan de Martínez de Hoz sentó las bases de una orientación llamada a consolidarse en los '90 bajo la legitimidad democrática. La diversidad estructural de la burguesía argentina, concomitantemente, fue cediendo a fuerza de desindustrialización, centralización y concentración del capital.

Revitalizado y al corriente de los imperativos que recorrieron el mundo, el liberalismo conservador volvió a ocupar el centro de las reflexiones políticas y reconquistó espacios significativos. Fundaciones de investigación y planeamiento, partidos políticos de derecha y prensa liberal, propiciaron un clima de ideas en el cual este discurso dejó de ser un dispositivo de reacción y veto para avanzar en el desmantelamiento del régimen de posguerra y en la consolidación de un conjunto de valores más acordes con la sociedad emergente.

Preocupados por una mirada histórica, escogimos a tres publicaciones periodísticas tradicionales, cuyas editoriales políticas apelan a principios diversos del pensamiento liberal conservador. *La Prensa* fue fundada en 1869 por José C. Paz y se caracterizó por la defensa militante de los principios del liberalismo económico; su oposición al régimen le valió ser confiscada por el peronismo en 1951. Tras su reaparición en 1956, se consolidó como una de las usinas ideológicas antiperonistas más intransigentes. La libertad de empresa, la propiedad privada y los límites del poder político ocuparon un lugar central en sus preocupaciones. *La Nación* fue creada en 1870 por Bartolomé Mitre, y se esforzó por erigirse, tal como lo deseaba su fundador, como "Tribuna de Doctrina" del pensamiento político argentino. La normativa institucional y la impronta jurídica atravesaron con asiduidad sus reflexiones⁴. Finalmente, *Criterio* comenzó a publicarse en 1928, con el propósito de convertirse en un ór-

gano de ideas apoyado por las instituciones eclesíásticas pero independiente en todo aquello que no remitiera directamente al dogma y la moral. Tras sus inicios ligados con el catolicismo integrista, crítico de los postulados del liberalismo, se identificó con sus principios políticos y republicanos intentando, a la vez, matizar sus concepciones económicas con aquellas propuestas por la doctrina social de la Iglesia Católica⁵.

Como se ha indicado ya, la significación de estos medios periodísticos en la esfera pública local rebasa su papel como instancia privilegiada en la formación de la opinión pública. La sociedad argentina contemporánea, lejos de caracterizarse por la existencia de un conjunto de ciudadanos con igualdad de acceso al debate y con garantías para intervenir en la conducción de los destinos colectivos, estuvo signada por la inestabilidad y la obturación de los canales de participación. La permanencia y predicamento de estos tres enunciadores fueron excepcionales. También lo fue su voluntad por interpelar e influir al arco político antiperonista que no lograba cristalizar en un partido ni imponer una línea de acción coherente a las intervenciones militares.

Con el retorno a la democracia, en diciembre de 1983, la prensa liberal conservadora se comprometió en la defensa de las instituciones republicanas pero siguió insistiendo desde sus tribunas sobre la necesidad de un cambio económico mientras criticaba al radicalismo su política hacia los militares, la Iglesia, los sindicatos y la cultura.

El año 1989 implicó una ruptura múltiple; algunas de las reflexiones subsiguientes se destinarán a explorarla. Basta por ahora con señalar que, tal como el resto de las esferas de la economía argentina, las industrias culturales sufrieron una profunda transformación a partir de las políticas implementadas en los '90⁶. En este nuevo escenario, ni *La Prensa* ni *La Nación* fueron los actores de mayor expansión y dinamismo. No obstante, ambos sufrieron adaptaciones significativas.

La Prensa dejó de ser una empresa familiar y fue adquirida, en 1993, por Amalia Lacroze de Fortabat (consolidada en sectores tan diversos como el cemento, los ferrocarriles y el gas). Sufrió luego un nuevo cambio al pasar a ser propiedad del dueño del matutino *La Razón*. Como espejo de los nuevos tiempos, la intransigente *La Prensa* abandonó el estandarte antiperonista que coronaba sus editoriales⁷ y se transformó en posesión de uno de los grupos económicos más cercanos al gobierno del presidente Menem.

La Nación, por su parte, se asoció a *Clarín* (quien desde un espíritu fuertemente desarrollista había defendido políticas contrapuestas al liberalismo) y conjuntamente adquirieron paquetes accionarios de diarios del interior del país. El diario de Mitre se vinculó también con Editorial La Urraca en *Grupo de Revistas* y generó nuevos productos. Aunque ocupa los primeros puestos en la prensa local⁸, *La Nación* se ha expandido hacia públicos más bien segmentados, asentándose no tanto en determinada línea político-ideológica sino en un estilo que su secretario de redacción considera identificado con la "seriedad" y el "refinamiento".

Ha sido posiblemente *Criterio* la publicación con mayor continuidad durante los dos períodos analizados. En términos de comité de redacción, gran parte de los colaboradores que estaban presentes en los años '70 siguieron perteneciendo a la revista en la última década del siglo. También su organización y diseño mantuvieron semejanzas notables. Recién en 1994 su director nos informa una modernización (muy cautelosa, por cierto) en la presentación de *Criterio*. En este nuevo formato, incluso los auspiciantes y la estrategia de comercialización (por suscripción, en parroquias o librerías religiosas) permanecen intactos. Del mismo modo en que es infructuoso considerar a los dos periódicos escogidos sin hacer referencias al mercado editorial, el discurso de *Criterio* es incomprensible si no se lo relaciona con la postura pública de la Iglesia Católica. Hacia principios de los '90, la emergencia y consolidación de un variado conjunto de religiosidades alternativas recortaron aún más su predicamento en una cultura que nunca había alcanzado el fervor católico de otras sociedades latinoamericanas. A pesar de ello, las preocupaciones sociales de los principales partidos políticos devolvieron a la Iglesia su lugar como portavoz de las reivindicaciones sociales, ahora tematizadas en clave caritativa. El papel asignado a la Iglesia como institución autónoma del Estado y como defensora de los desposeídos explica parcialmente que *Criterio* haya perseverado en el rol de conciencia crítica del poder político.

Nos centraremos en las editoriales políticas de estos medios, cuyo estilo discursivo se caracteriza por cierta retórica científica, las referencias frecuentes a los nombres clásicos del pensamiento occidental y la abundancia de citas académicas.

La primera mitad de los setenta (1969-1976)

La crisis de dominación

La Argentina contemporánea se ha destacado, quizás como ningún otro país en el mundo, por ser un terrible ejemplo de cómo una nación rica, dotada de cuantiosos recursos naturales y humanos, pudo malograr su desarrollo. Samuelson (1971: 521) llegó a afirmar que no temía tanto la sombra de las revoluciones totalitarias de un Lenin o un Mao, ni el regreso al *laissez-faire* más salvaje, como el destino de la Argentina, "patrón frente al cual cualquier hombre moderno se santigua y dice 'Que me salve la Gracia de Dios!'".

Entre 1930 y 1976 el país sufrió seis intervenciones militares, y a partir de 1955 ningún presidente fue elegido libremente sin condicionamientos ni veto militar dentro de un proceso normal de sucesión. Por su parte, la dinámica del ciclo económico, si bien garantizaba en el mediano plazo un moderado crecimiento, se desenvolvía de manera discontinua (el llamado modelo *stop & go*) exacerbando las pujas distributivas. En este marco, un Estado fuertemente interventor no logró funcionar como instancia de la unidad nacional y terminó por constituirse en botín de las distintas fracciones en pugna. Atributos todos de la Argentina post '55, ¿por qué razón entonces asignar a la crisis de fines de los años '60 y principios de los '70 una naturaleza particularmente aguda y disruptiva?

Ciertamente, la masividad y la violencia de los conflictos de los años '70 sólo son comprensibles en el marco del cercenamiento político y la ingobernabilidad de larga data. Cercenamiento e ingobernabilidad que, sumados a una legitimidad política proclamada y violada de modo recurrente, habría terminado por erosionar la confianza en las posibilidades del sistema democrático de consolidarse y contener las demandas de la sociedad. La crispación de los antagonismos se enmarcaba, en términos más inmediatos, en la instalación de un gobierno (la autodenominada Revolución Argentina), en 1966, que, modernizador en lo económico y autoritario en lo político, había profundizado el carácter excluyente del régimen⁹.

Hacia mediados de 1969, en una de las ciudades más importantes del interior del país, la confluencia de movilizaciones obreras y estudiantiles, con amplio apoyo de los habitantes, concluyó en el desborde de las fuerzas policiales y en la toma del control de la ciudad por parte de los manifestantes durante horas. Este suceso, conocido como "Cordobazo" y con reminiscencias del mayo francés del año anterior, inauguró una profunda redefinición de los conflictos que habían caracterizado el ejercicio de la política en la Argentina.

Desde el derrocamiento de Perón en 1955, tanto gobiernos constitucionales como militares habían sido jaqueados por los reclamos de algunas organizaciones corporativas de la sociedad civil. Estas instituciones habían actuado siempre evitando verse ellas mismas desbordadas por las demandas de sus miembros. Su poder de presión sobre el Estado residía en la habilidad para actuar como sujetos unificados susceptibles de activar y refrenar la movilización de sus bases. Por otra parte, hasta mediados de los años '60, el peso de los sindicatos y el fantasma peronista aparecían como la fuente de amenaza por excelencia para los sectores sociales privilegiados. En este marco, los reclamos sindicales, aunque intransigentes, habían reconocido las reglas de juego del sistema capitalista. A partir de 1969, en contraste, ni las poderosas estructuras sindicales fueron el principal vehículo de las demandas ni los reclamos se circunscribieron a exigencias redistributivas. Nuevos actores impugnaron los lazos de dominación dentro y fuera de sus organizaciones.

La Iglesia Católica, los sindicatos, los claustros universitarios, los partidos políticos tradicionales, vieron emerger sectores contestatarios y sufrieron fracturas. Más allá de su carácter heterogéneo e inorgánico, gran parte de las nuevas fuerzas se identificaban con el "socialismo nacional" y consideraban cierta cuota de "violencia popular" como instrumento legítimo en la lucha por el poder. En este contexto, se sucedieron revueltas urbanas, huelgas y tomas de fábrica lideradas por dirigentes clasistas, protestas estudiantiles y grupos con variadas demandas reivindicativas. Alimentadas por este clima insurreccional, surgieron organizaciones políticas militarizadas dedicadas al ejercicio de la guerrilla urbana y rural. Al compás de la generalizada oposición al régimen militar, el peronismo amplió su base social y ungió sus discursos de un tono más violento y desafiante.

Tras intentos frustrados de conjurar la crisis, el gobierno militar optó, en 1972, por la apertura democrática sin agrupaciones proscriptas. El peronismo pudo, de este modo, acceder al poder tras dieciocho años de su derrocamiento.

Aún profundamente redefinidas, la militarización de la política y la agudización de los conflictos laborales no cesaron bajo el nuevo gobierno. Al retornar a la presidencia, en 1973, el peronismo profundizó sus fracturas, internalizando y dirimiendo en su seno los conflictos que atravesaban a la sociedad. Pero en este caso, la disputa adquirió rasgos particulares. Como apunta Halperin Donghi (1994), la vida política se escindió en un hemisferio diurno, donde los rituales democráticos eran ejecutados y celebrados por oficialismo y oposición, y un hemisferio nocturno en el cual las disputas entre peronistas se zanjaban en el silencio de la violencia. Desde 1973, el Estado se convirtió en el principal escenario de la contienda. Como señala Sidicaro (1998), sus recursos económicos, burocráticos y armados fueron a la vez instrumento y botín de la lucha.

Luego de la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, sus herederos en el poder marginaron a los sectores más radicalizados del movimiento e intensificaron una campaña "antisubversiva" tanto legal como encubierta. Con la expulsión definitiva de estos grupos del gobierno¹⁰ y la desarticulación de gran parte de las organizaciones de base¹¹, las disputas entre los grandes sindicatos peronistas y el entorno presidencial fueron ganando importancia. El antagonismo dio cuenta de las profundas dificultades para conciliar las demandas de los trabajadores y el ejercicio del gobierno. Los inconvenientes para concertar una política de precios y salarios crisparon los reclamos de los obreros, que comandados ahora por los jefes sindicales peronistas se extendieron a todo el país y lo inmovilizaron con sus jornadas de protesta. Temerosos por la posibilidad de que el gobierno fuera hegemonizado por los sindicalistas, los empresarios mismos declararon una huelga patronal y fundaron distintas organizaciones invocando al golpe militar. Las tensiones en el mundo de la producción y sus repercusiones en el gobierno fueron, a su vez, acompañadas por el enfrentamiento entre las organizaciones armadas y los grupos paramilitares que actuaban en la clandestinidad. En marzo de 1976, el regreso de los militares al poder silenció a unos y otros e inauguró los años de plomo del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Más allá de este sucinto recorrido, lo relevante para nosotros es que la crisis política de los años '70 constituyó una múltiple amenaza a la dominación social. Nos referimos así a la erosión generalizada de los vínculos que constituían las clases sociales y sus formas de articulación. El control del proceso productivo por parte de los empresarios fue jaqueado inicialmente por los sindicatos clasistas y luego por las grandes corporaciones gremiales. La facultad de los funcionarios públicos de imponer autoridad fue puesta en cuestión por los estallidos populares que acompañaron la decadencia del gobierno militar primero y por las disputas en el elenco gubernamental después. Finalmente, el monopolio estatal de la violencia legítima fue minado por la emergencia y consolidación de organizaciones políticas militarizadas que, en muchos casos, eran alentadas desde el propio gobierno. Si sumamos el programa económico que intentó poner en práctica el peronismo, el cual asignaba al Estado un papel central, intentaba controlar las inversiones extranjeras y propiciaba una distribución progresiva de la riqueza, concluiremos que el liberalismo conservador tenía razones para considerar que la realidad desafiaba el orden defendido en sus principios.

El liberalismo conservador frente a la amenaza

Movilización social y perplejidad

El gobierno de la Revolución Argentina, instaurado en 1966, se asentaba en una compleja alianza entre liberales y nacionalistas. Los primeros ocuparon el Ministerio de Economía e intentaron forzar una normalización del capitalismo desde el Estado; los segundos retuvieron las carteras más políticas, aspirando a refundar la sociedad sobre bases corporativas y moralmente reaccionarias. Más allá del malestar que generaba en las conciencias liberales el puritanismo presidencial y su agresivo avance sobre diversas manifestaciones culturales, la aplicación de su plan económico, lejos de oponerse a la impronta represiva del gobierno, la presuponía como medio para reprimir el descontento de las nutridas categorías perjudicadas.

Paradójicamente, los primeros resultados positivos de este maridaje entre orden y progreso profundizaron las diferencias entre los dos socios en el aparato estatal y opusieron dos modelos de sociedad que comenzaron a revelarse incompatibles. Los liberales, secundados por las grandes instituciones y personajes de las finanzas y el capital transnacional, perseveraban en su voluntad de erosionar el poder sindical y profundizar el cambio económico iniciado. Los nacionalistas deseaban inaugurar el tiempo de la distribución y las recompensas, única estrategia posible para consolidar su vínculo con los sectores sindicales dispuestos a ensamblarse en el esquema corporativo que acariciaba el presidente.

La identificación de las causas y las estrategias propuestas para conjurar la movilización popular de fines de los '60 debe entenderse como expresión y excusa de los mencionados desgarramientos en la cúpula del poder. La trinchera liberal conservadora debió combatir en dos frentes: el de la insurgencia civil y su amenaza al orden, por un lado, y el de las tendencias nacionalistas dentro del gobierno militar, por el otro. Aún con preocupaciones semejantes, las plumas liberales no atinaron a desplegar un diagnóstico convergente. Fue justamente esta dificultad la que permitió a los nacionalistas, pese a su estrepitoso fracaso para garantizar la paz interna, purgar algunos de sus socios liberales, perpetuarse en el poder y retrasar la apertura institucional.

Tras el estallido cordobés en mayo de 1969, los desvelos de *La Nación* se orientaron a escrutar los vínculos entre organizaciones armadas, estudiantes contestatarios y trabajadores radicalizados convencidos de que "entre las muchas cosas que se destruyeron el jueves [día del Cordobazo], hubo una que no puede dejar de señalarse: el sentimiento de seguridad" (*La Nación*, 2 de junio de 1969: 1). El diario identificó dos protagonistas bien diferenciados: los "perturbadores", "los gérmenes del odio y la intolerancia", quienes habían desatado la "correntada de muerte y sacrificio", "cuya única finalidad es la de abrir las puertas del país a una eventual dominación del totalitarismo", y los trabajadores y estudiantes inocentes. Estos sólo habrían contribuido con la "vehemencia inicial" pero habían sido arrastrados por un furor que los desbordaba (los calificativos corresponden a *La Nación*, editoriales del 30 de mayo, 1 de

junio y 30 de junio de 1969: 8). A ellos dirigía *La Nación* sus advertencias: podían convertirse “tanto en pretexto como en carne de cañón” (*La Nación*, 1 de junio de 1969: 8) y, permitiéndose citar a Lenin, los instruía diciendo que “para hacer la revolución se necesita un revolucionario por cada tres idiotas útiles” (*La Nación*, 2 de junio de 1969: 1).

La Prensa, fiel a su historia, remitió la amenaza a su enemigo ancestral: el peronismo. Para el matutino de Paz, la culpabilidad por los levantamientos populares era evidente. Si en 1955 se había iniciado en Córdoba la Revolución Libertadora¹², para “el primer intento serio de organizar la contrarrevolución implícita, se había elegido el mismo escenario”. En este sentido

“...tras esta guerrilla metódicamente preparada han actuado al unísono el peronismo y el comunismo, como las dos caras de una moneda. El peronismo, se ha dicho, no es otra cosa que la versión vernácula del comunismo internacional” (*La Prensa*, 3 de junio de 1969: 3).

Un conjunto de imágenes se asociaba en su discurso: la identidad entre peronismo y guerrilla y su aspiración de “reimplantar en el país la tiranía abatida en 1955” (*La Prensa*, 10 de junio de 1969: 10), el carácter eminentemente internacional del conflicto y cierta concepción lebonniana de la revuelta (“masas enardecidas” “de contagio irracional”, “turbas febriles”, “orgía vandálica” [estas imágenes aparecen en las editoriales del Diario *La Prensa* del 3, 7, 10 y 13 de junio de 1969]).

A diferencia de *La Prensa* y *La Nación*, que enfatizaron el papel de los cuadros subversivos, *Criterio* les confería un rol muy marginal en sus argumentos. Frente a la polémica entre el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y la jerarquía eclesiástica, la publicación religiosa venía intentando, no sin ambigüedades, ocupar una posición mediadora. A la hora de comentar los hechos de Córdoba, la revista ensayó una explicación igualmente matizada. En su análisis, empleó términos como “rebelión”, “enfrentamiento entre hermanos”, “expresión del descontento popular” (*Criterio*, 12 de junio de 1969: 359 y 377; y 10 de julio de 1969: 439 y 451), imágenes que contrastan con el temor generado por los estallidos en las otras dos publicaciones.

Algunas similitudes pueden encontrarse entre el discurso liberal conservador y el esgrimido por el presidente del gobierno militar. Como hicieran *La Nación* y *La Prensa*, el gobierno detectó detrás de los sucesos una fuerza metódicamente organizada y de filiaciones internacionales¹³ y, como estos medios, enfatizó la violencia de los participantes y la apropiada y eficaz represión encarada por el ejército. También en este caso, Onganía intentó distinguir a réprobos de elegidos y se esforzó por interpretar y conducir las demandas de los descontentos “recuperables”¹⁴.

Es justamente en la interpretación de estos reclamos y en las consecuencias políticas que debían extraerse de ellos, donde las divergencias se hicieron evidentes. Las plumas liberales imputaron los hechos a causas centralmente políticas, denunciando las “veleidades” presidenciales para con el sindicalismo y la obstrucción de los canales de participación política (*La Nación*, 30 de

mayo de 1969: 8; y 6 de junio de 1969: 8; y *La Prensa*, 7 de junio de 1969: 8). Deseosos de preservar la política económica de la recomposición ministerial en ciernes, los liberales instaban al gobierno a olvidar sus “sueños mesiánicos” y prestar oídos sordos a la demagogia. *La Prensa* publicó sus editoriales de estadísticas que pretendían demostrar que la región insurrecta era la mejor remunerada del país y que la Revolución Argentina debía abandonar las “vacilaciones” y profundizar la política económica emprendida. A pesar de estos consejos, el gobierno aceptó la renuncia de su ministro de Hacienda e imputó las causas del estallido a la falta de “contenido social” de la política liberal.

El presidente y su mentalidad autoritaria también eran criticados por *Cri - terio*, aunque en este caso, el problema no eran las estructuras sindicales y los esfuerzos oficiales por cooptarlas sino la dirección autoritaria y el adoctrinamiento impuestos por los militares en el poder (12 de junio de 1969: 363).

Los liberales quedaron entonces excluidos de los principales resortes del gobierno y se esforzaron por examinar el novedoso y convulsionado escenario político local. Constataron con horror la crispación de los conflictos y la emergencia de organizaciones armadas, y descargaron sus críticas sobre un elenco militar que, a pesar del recambio de figuras¹⁵, buscaba reconstruir sus bases de apoyo y perpetuarse en el ejercicio del poder a partir de una política económica más nacionalista y una línea sindical más conciliadora.

A lo largo de los meses, *La Nación* abandonó sus iniciales contemplaciones para con estudiantes y trabajadores y los acusó de ser “respaldo operativo de la guerrilla”. La toma de fábricas y universidades, el asalto a comisarías, el intento de copamiento de poblados distantes y los secuestros y asesinatos merecieron un análisis minucioso desde sus editoriales. En todos los casos, la estrategia argumentativa era doble: por un lado, se negaba una intencionalidad clara a los sucesos, enfatizando los medios sobre los fines, y por el otro, se buscaba escindir a las bases de sus dirigentes radicalizados. Para el diario, los “promotores del caos” carecían de coherencia doctrinaria y eran, en cambio, resultado de una “confusa mezcla de ideologías, donde en verdad los extremos se tocan y se asocian con afinidades temperamentales” (*La Nación*, 31 de mayo de 1970: 8). De este modo, sólo se recuperaban los detalles concernientes a la saña de los “revoltosos”. Por otra parte, una y otra vez se denunciaban los propósitos mezquinos y díscolos de los dirigentes gremiales y estudiantiles y la filiación internacional de los guerrilleros¹⁶. Se trataba de alentar al gobierno a restituir los canales democráticos de representación y de persuadir a los insatisfechos de que era posible expresar sus disidencias de manera pacífica.

La Prensa apenas reflejó la emergencia y consolidación de organizaciones políticas militarizadas, atenta con exclusividad a los conflictos laborales y sus efectos sobre la producción. Sus únicas referencias a la guerrilla intentaban inscribirla en un contexto internacional donde el “totalitarismo imperialista del bloque soviético” amenazaba con extenderse por todo el planeta. Sus argumentos se centraban más en la descalificación del movimiento intelectual europeo y latinoamericano que apoyaba el uso de la violencia que en los sucesos locales (entre ellos *La Prensa*, 17 y 19 de julio de 1970). Pero, sobre todo,

sus editoriales estaban destinadas a relatar en detalle las nuevas formas de lucha y a cuestionar con insistencia la organización sindical legada por el peronismo. El periódico calificaba las prácticas de los trabajadores cordobeses como “ejercicios de insurrección” (*La Prensa*, 6, 16 y 19 de junio de 1970). Frente a estos comportamientos las autoridades mostraban, para *La Prensa*, una endémica pasividad.

Sólo la supresión de toda forma de organización obligatoria, de las cuotas compulsivas, del sindicato único, y de la estructura monolítica de la central obrera (características todas del sindicalismo peronista) podían garantizar una sociedad verdaderamente democrática (*La Prensa*, 22 de abril de 1971: 8).

En contraste, lo que más intranquilizaba a la publicación católica era la emergencia de un tipo de violencia distinta de la desatada en los estallidos populares del interior. En efecto, si para *Criterio* había resultado difícil convalidar ciertas iniciativas contestatarias de los sacerdotes tercermundistas, la certeza de que muchos de ellos alentaban la opción por las armas reforzaba su alineamiento con las corrientes eclesiales conservadoras y la llevaba a reclamar la restitución de la unidad y la obediencia dentro de la comunidad católica. Su temor se cifraba en que la apelación a la fuerza ya no era producto del desborde callejero sino que habían surgido organizaciones que la empleaban como “medio para intimidar a la población”. En este caso, los protagonistas ya no eran los sectores más empobrecidos sino intelectuales, provenientes de las clases medias y altas e inspirados por las más variadas corrientes ideológicas. En clave de advertencia, *Criterio* recordaba que sus intenciones eran radicalizar al movimiento obrero reservándose siempre para sí el papel de “estados mayores”, y para los trabajadores el de “soldados rasos” (13 de agosto de 1970: 523). Las reflexiones de la publicación adquirieron, a principios de 1971, un carácter abiertamente apocalíptico: “la Argentina parece dirigirse hacia el abismo de la desintegración”. Si no se propiciaba el restablecimiento de la política, la guerra civil era inminente (*Criterio*, 24 de marzo de 1971: 141).

Así, los intelectuales del liberalismo conservador concluyeron progresivamente que sólo la legitimidad del sistema jurídico podía refrenar la crisis. En efecto, el reconocimiento aún velado de cierta legitimidad de las prácticas violentas en un escenario restringido (compartido incluso por los liberales) constituyó un hecho inédito propiciado por las revueltas y acciones gremiales y armadas inauguradas en Córdoba. El dilema que tradujeron sus comentarios evocó la fórmula acuñada por Sarmiento, uno de los estadistas más influyentes del siglo XIX. Se trataba, una vez más, de optar entre la “civilización” o la “barbarie”. La primera diáfana y identificada con la ley, y la segunda con una violencia que terminaría por destruirlo todo a su paso. El imperio de las normas constitucionales se transformaba en la principal estrategia para conjurar el peligro.

Más allá de este punto de partida común, la postura frente al tipo de apertura electoral perpetuó las desavenencias. La restitución de la legitimidad democrática estaba indisolublemente ligada con el peronismo. Si en el pasado había sido posible recubrir el sistema político de cierta investidura legítima a

pesar de las proscripciones, la ebullición social de los '70 hacía inviable esa opción. Hasta principios de 1971, la voluntad castrense de permanecer en el poder había nutrido la crisis social y política. Con la llegada de Lanusse al gobierno, comenzó a tomar cuerpo la apertura institucional. *La Nación* apoyó al presidente y aceptó la reincorporación del peronismo a la vida política nacional, no sin recordar los “agravios sufridos por las víctimas del tirano depuesto” (2 de mayo de 1971: 8). *La Prensa* rememoró al Ejército su compromiso de impedir cualquier retorno al régimen peronista y bregó por el rechazo de toda negociación con el “dictador” (16 de junio de 1971: 8). El diario de Paz se mostró además escandalizado cuando el principal partido opositor al peronismo, la Unión Cívica Radical, acordó con éste la defensa no negociable de la apertura democrática. Ni temerosa ni escandalizada, *Criterio* recibió con sumo beneplácito la propuesta gubernamental y reiteró la necesidad de garantizar un juego político “limpio y abierto” sin ningún tipo de proscripción (13 de mayo de 1971: 259-261 y 24 de junio de 1971: 379-381).

Frente a un escenario político enrarecido, estos conservadores liberales no atinaron a desplegar un diagnóstico coincidente. Con el Cordobazo, el antiguo consenso antiperonista dio paso a versiones distintas sobre los sucesos, en las cuales más allá de las culpas endilgadas al gobierno de Onganía y los apoyos decididos a la propuesta de Lanusse, los enemigos comunes distaban de ser claramente identificados. La actitud con que recibieron al viejo caudillo también los diferenció: inquietud, escándalo y satisfacción atravesaron las plumas de los comentaristas. La brecha entre unos y otros comenzará a cerrarse con el retorno del peronismo al poder.

La fractura del peronismo y las primeras coincidencias

A despecho de los antiperonistas más recalcitrantes, el peronismo volvía al poder y lo hacía, de algún modo, como único actor capaz de reconstruir el orden y la paz que deseaban sus ancestrales adversarios. Los albores del traspaso de mando habían sido tensos, con versiones que negaban la voluntad de las fuerzas armadas de respetar el designio de las urnas y con una presencia protagónica de las organizaciones armadas peronistas en la campaña electoral. En este clima, Cámpora, el candidato apoyado por Perón, alcanzó la presidencia.

En su comentario sobre la asunción de las nuevas autoridades, *La Nación* instó al país a celebrar con la “firmeza del espíritu republicano”. Consciente de las “dudas paralizantes” y de la carga de “presagios persistentes” en gran parte de sus lectores, el matutino llamó a los antiperonistas a no ser “presos del pasado”. Si bien la exaltación partidaria y el sentimentalismo del nuevo partido gobernante le despertaban fastidio, la publicación argumentaba que existían señales alentadoras. El comprometido respeto a las fuerzas políticas y a la prensa independiente, y la voluntad de aceptar lo convenido en las negociaciones multipartidarias, restaban al presidente su aparente carácter revulsivo (*La Nación*, 25 de mayo de 1973: 8). Inicialmente, ni la amnistía de los presos políticos ni la toma de diversas reparticiones estatales merecieron su atención.

La Prensa, por su parte, reprodujo un comentario lastimoso. Con anterioridad a la asunción, los editoriales y columnistas se encargaron de identificar cualquier ensayo keynesiano con el advenimiento del más “despótico” régimen soviético. Los colaboradores del diario de Paz transmitían la imagen de que con Cámpora el país iniciaba un inexorable camino hacia el “colectivismo comunista”. El 25 de mayo de 1973, la reflexión fue en clave histórica y exclusivamente consagrada a reafirmar el espíritu “libre” y “republicano” que el periódico se comprometía a conservar en alto (*La Prensa*, 25 de mayo de 1973: 8). Desde entonces y sin respiro, el diario utilizó su columna editorial para descargar con furor variadas críticas contra el gobierno. Cualquier suceso de la vida cotidiana era excusa para desplegar su espanto frente a lo que consideraban caos y anarquía.

Criterio se había adelantado a sus pares saludando el regreso del peronismo a la arena política nacional, pero también se había anticipado en sus sugerencias al elenco gobernante. Sus reflexiones remitieron a la necesidad de desactivar las “formaciones especiales” (organizaciones político-militares) y de conformar mecanismos de mediación dentro del partido peronista que permitieran el procesamiento de las diferencias, sobre todo a la luz de la vejez de Perón¹⁷.

Con el correr de los días, un nuevo antagonista fue captando la atención de los colaboradores de las publicaciones y, en este caso, el acuerdo contrasta con las divergencias precedentes. *La Nación*, *La Prensa* y *Criterio* identificaron a un grupo persistente de jóvenes “jacobinos” enquistados en las universidades y el campo cultural y, con el mismo arsenal empleado inveteradamente para combatir a los nacionalistas de derecha, apuntaron ahora sus argumentos contra los sectores radicalizados del partido de Perón. *La Nación* veía en ellos a

“...bandas pequeñas bien adiestradas y hasta armadas (que) ‘exigen’ mediante la intimidación verbal o física el cese de tareas de algunos docentes, o les imponen mediante la coacción más grosera la presentación de sus denuncias (...) elementos cuya acción, hasta el momento, sólo ha provocado el caos y aparenta terminar con la destrucción institucional y académica” (10 de junio de 1973: 8).

La Prensa identificaba los mismos atributos entre quienes tomaban reparaciones privadas y estatales y alentaban desórdenes callejeros (16 de junio de 1973: 6).

Mientras *La Nación* daba muestras de realpolitik aconsejando al gobierno sin agraviarlo y *La Prensa* reconocía el caos tantas veces presentado, *Criterio* se permitía alzar su voz contra un gobierno que había recompensado

“...las ansias revolucionarias de una juventud frustrada dándole una institución [la universidad] para retozar a sus anchas sin molestar a los que se ocupan de los problemas verdaderamente importantes del país. Ahora hay que permitirles emular la ‘revolución cultural’ de los guardias rojos de Mao, embriagarse de discursos, cánticos y bombos; hay que permitirles destruir porque, una vez nivelado el terreno, se sabe que no será ella la llamada a construir. Y, por supuesto, todo esto en nombre del

pueblo, un pueblo que difícilmente se reconocería en estos 'gorilas' de nuevo cuño" (14 de junio de 1973: 277).

Los liberales conservadores coincidían puntualmente en la caracterización de estos grupos: se los acusaba de imponer los méritos políticos a la excelencia académica o artística, de ubicarse con prepotencia en sectores claves de la cultura, de intercambiar amenazas sin esgrimir más argumentos que el uso de la fuerza y, sobre todo, de intentar inútilmente arrastrar a las masas obreras con sus "ínfulas de vanguardia". Si bien la relación entre estudiantes y guerrilla no era afirmada explícitamente por los editoriales, los calificativos empleados para definir a unos y otros eran semejantes, y los vínculos insinuados con frecuencia. La identificación entre jóvenes "revoltosos" y derecha nacionalista era prácticamente total; las publicaciones no mencionaban contactos con los ideales de la izquierda y, por lo tanto, tampoco se ocupaban de combatirlos.

De modo prodigioso, la prensa liberal conservadora lograba tanto poner en palabras aquello que la derecha peronista debía callar por verticalidad como alimentar los recelos de quienes, provenientes sobre todo de la izquierda liberal, intuían el integrismo autoritario que signaría la política montonera.

Con un antagonista común claramente delimitado, la principal diferencia entre los medios radicó en el vínculo que establecieron entre los jóvenes radicalizados y el resto del gobierno. Como muestra de flexibilidad, el otrora severo antiperonista diario *La Nación* contraponía la imagen de Perón, el político "dueño del más vasto poder en la Argentina de hoy", a los "resabios de fanáticos". Para el matutino, la tolerancia y respeto recíproco con que trabajaban los bloques partidarios se contraponía a los deplorables hechos de fuerza sucedidos en las diversas áreas vinculadas con la cultura nacional (todas las citas corresponden a la editorial de *La Nación*, 23 de junio de 1973: 8).

El pensamiento de *La Prensa* admitía menos matices. Si bien utilizaba los discursos de los funcionarios públicos para contrastarlos con el desorden reinante y exhortarlos a restablecer la disciplina y el orden prometidos (*La Prensa*, 14 de junio de 1973: 6), sus esfuerzos persuasivos de ningún modo se cifraban en contrastar las distintas fracciones del elenco gubernamental. Muy por el contrario, se ocupaba en insistir en que los sectores contestatarios habían sido alimentados desde el exterior y que sólo representaban la agudización de los rasgos característicos del movimiento justicialista.

Finalmente, *Criterio* compartía la mirada de *La Nación* pero en lugar de contraponer comportamientos diversos buscaba mecanismos institucionales y políticos que permitieran reconstruir el poder estatal y zanjar las tensiones que anidaban en el gobierno. Era, sí, más crítico con los dirigentes del peronismo, a quienes endilgaba falta de iniciativa para enfrentar "la desorganización del movimiento justicialista y la dura lucha de tendencias que se dirime en su seno" (*Criterio*, 14 de junio de 1973: 277). La revista incluso llegó a dudar del deseo de Perón de contribuir a la pacificación, al adivinar que especulaba con un desgaste de Cámpora para volver, él mismo, a terminar con la "diversión política" (*Criterio*, 12 de julio de 1973: 340).

De este modo, y aun por fuera del peronismo, la prensa liberal se esforzaba por participar de la lucha por el “auténtico” justicialismo, invocando la autoridad de un caudillo y la verticalidad de un movimiento que tantas veces habían cuestionado.

Hacia mediados de julio de 1973, Cámpora y su vicepresidente presentaron la renuncia. *La Nación* interpretó este episodio como el resultado de una “frustración política”. No fue la existencia de un proyecto izquierdizante o la radicalidad de las políticas presidenciales lo que habría precipitado, según sus editoriales, el recambio de autoridades. La caída de Cámpora se explicaba por el “vacío de poder” (*La Nación*, 14 de julio de 1973: 8).

Si bien *La Prensa* no consagró editorial alguno a la renuncia de las autoridades, sus comentarios coincidieron en identificar este vacío y en culpar al justicialismo de confundir instituciones públicas con meros aparatos facciosos. La “anarquía” reinante era ilustrada en una gran variedad de escenarios¹⁸ y, en lugar de celebrar los esfuerzos gubernamentales por condenar los hechos de violencia, el diario de Paz contrastaba con sarcasmo el “antes y después” del justicialismo.

“En el transcurso de los últimos tiempos, y antes de las elecciones del 11 de marzo, dirigentes políticos y gremiales de diversas tendencias –de manera especial los pertenecientes al FREJULI– alentaron en todos los tonos los gravísimos hechos de violencia ocurridos casi a diario con el claro propósito de llevar el país al caos. (...) Sin embargo, de manera brusca, el panorama expuesto presentó un cariz distinto: desde la asunción de las más altas representaciones públicas por parte del FREJULI, los hechos de violencia –cuyo móvil y características, por una parte, no han experimentado cambios–, son juzgados con verbal severidad (...) los complacientes de entonces se encuentran con la misma situación de perplejidad y sorpresa del aprendiz de brujo, ensayando el apaciguamiento de rebeldías que, sin duda, habría sido mucho más sensato no fomentar” (*La Prensa*, 29 de junio de 1973: 6).

Por su parte, *Criterio* se proponía un ejercicio de sociología política y constataba, después de la llegada de Perón a la Argentina, la existencia de una alianza defensiva conformada por sindicalistas y empresarios contra la juventud radicalizada. Desde su punto de vista, la opción de Perón era evidente (*Criterio*, 26 de julio de 1973: 371-375 y 9 de agosto de 1973: 407-408). ¿En qué había consistido el error de Cámpora y sus seguidores? Claramente en subestimar a sus antagonistas y “en creer, finalmente, que ellos estaban llamados a administrar el carisma del líder” (*Criterio*, 26 de julio de 1973: 372). Para la revista católica, estaba ahora en manos del gobierno reconstruir el Estado, profundizando sus principios republicanos y orientándolo a la concreción de los objetivos reformistas apoyados por el electorado (*Criterio*, 26 de julio de 1973: 374).

Criterio y *La Nación* habían apoyado los deseos del líder exilado de constituirse en “prenda de paz”¹⁹ y respaldaron sus esfuerzos por reordenar el país político y económicamente. *La Prensa*, en cambio, siguió refiriéndose a quien sería el nuevo presidente con persistente desdén. Asimismo, mientras las dos

primeras publicaciones centraron su atención en los conflictos al interior del partido oficial, abogando por la marginación de los elementos más extremos, el periódico de Paz siguió atento a los conflictos laborales y a la situación de la economía y los empresarios. Este espíritu se mantuvo a lo largo de todo el gobierno de Perón.

Los tres, sin embargo, se ubicaron como guardianes del orden constitucional y asentaron sus sugerencias críticas en postulados de la Carta Magna. Su desprecio frente a la violencia juvenil descansaba ahora sobre la legitimidad de un sistema jurídico convalidado por los sufragios. Correlativamente, el discurso de la izquierda nacional era galvanizado por la idea de revolución (y de violencia), degradando a la política y al conflictivo diálogo que la acompaña. Entre los embates de un oficialismo que se encargó de acallar como “soportes de la guerrilla” a todos los medios periodísticos radicalizados, y un antiintelectualismo²⁰ que embebió a la izquierda setentista y le reservó a sus ideólogos o bien el acatamiento doctrinario o bien las armas, las tribunas liberales lograron apropiarse, con cierta facilidad, de los discursos moderados y humanistas.

Los albores del golpe y la convergencia antiperonista

Con la muerte del general, en julio de 1974, y durante el gobierno de su viuda, Isabel Perón, el tibio apoyo brindado por *La Nación* y *Criterio* al caudillo fue progresivamente reemplazado por una mirada crítica y alarmada. *La Prensa*, por su parte, vio confirmados sus peores pronósticos y se encargó de recordar el carácter premonitorio de sus advertencias.

Si en 1973 las leyes que favorecieron a los grandes sindicatos habían servido para conjurar la amenaza de los gremios clasistas, apenas un par de años más tarde el costo de semejante estrategia era evidente. La aceptación de las reglas impuestas por la sociedad capitalista tenía como contrapartida, para los jefes sindicales, exigencias redistributivas y políticas. De este modo, sus reclamos conspiraban contra los esfuerzos gubernamentales por fijar precios y salarios y granjearse el apoyo del capital. Las medidas económicas implementadas a mediados de 1975, el llamado Rodrigazo²¹, dejaron al descubierto los enfrentamientos en el gobierno y propiciaron la expulsión de quienes las habían alentado.

Los jefes sindicales y su afán distributivo se consolidaron desde entonces como principales adversarios de los liberales. *La Nación* les reprochaba la “exacerbación artificial de las necesidades” (16 de junio de 1975: 8) y los consideraba irresponsables por carecer de todo análisis sobre la situación económica del país. Los argumentos del diario se desvelaron por rebatir la “falsa” incompatibilidad entre los intereses de trabajadores y empresarios, defendiendo a éstos de una mentalidad

“...que cree –a menudo en forma casi irracional– que toda organización empresaria privada, por el solo hecho de serlo, está inclinada hacia ilegítimos afanes de lucro desmedido o hacia procedimientos reñidos con las normas éticas [los empresarios se ven sometidos a] una especie de

jaqueo psicológico permanente, en el cual desgastan gran parte de sus energías y de sus impulsos creadores (...) La actividad empresaria es, en principio y hasta tanto se pueda demostrar formalmente y en cada caso particular lo contrario, una parte legítima de la vida social” (todas las citas corresponden a la editorial de *La Nación*, 6 de junio de 1975: 8). [O bien] “Hará falta un largo lapso para eliminar el persistente sofisma que ha hecho creer a la mayoría de nuestra población que nuestro aparato productivo puede sobrevivir –como el gusano unívoro de los gnósticos, que se alimenta de su propia cola– sobre la base de un sistema de canibalismo económico, en el cual la prosperidad de un sector se nutre no de su propia productividad sino de la substancia de los demás” (*La Nación*, 26 de junio de 1975: 8).

Con respecto al gobierno, sus críticas se tornarían cada vez más sarcásticas y categóricas. A la incapacidad oficial de frenar la crisis y dictar medidas para encauzar el crecimiento del país, el matutino sumaba ahora la comprobación de su carácter sectario y titubeante. En el combate entre los sindicalistas y el círculo presidencial, *La Nación* no identificaba dos proyectos alternativos sino una simple confrontación por espacios de poder (6 de junio de 1975: 8).

La Prensa, por su parte, afirmaba que la crisis era el resultado de “30 años de políticas colectivistas” que, finalmente, habían desembocado en el abismo. Llamada a su juego, la publicación de Paz culpaba a los sindicatos y las luchas de poder entre justicialistas.

“Esta lucha de posiciones tácticas y estratégicas, mezclada con el antagonismo sindical, siempre ávido de nuevos beneficios, y ahora también de poder legal, ha hecho imposible cualquier forma de estrictez administrativa y ha impuesto la imperturbable marcha de los despropósitos financieros, de las agresiones económicas, del desdén por los intereses nacionales, no comprendidos por masas sin discernimiento” (*La Prensa*, 29 de junio de 1975: 4). [O bien] “Hay que entender de una vez por todas que el nefasto mercado negro y sus malditos especuladores, son el único recurso que una comunidad perseguida por absurdas medidas gubernativas, encuentra para proveerse de lo que es indispensable, y los empresarios y productores de los elementos para seguir produciendo” (*La Prensa*, 5 de junio de 1975: 4).

Reafirmando su desinterés por caracterizar las distintas fracciones del partido oficial, *La Prensa* remitía con frecuencia los sucesos de la hora a la historia del justicialismo y, lejos de vincularlos con la muerte del líder, consideraba que “directa o indirectamente, son obra suya” (15 de julio de 1975: 4).

Por su parte, *Criterio* recordaba la “alianza objetiva” que había acompañado a Isabel y lamentaba que ésta y su entorno la hubieran desintegrando irresponsablemente. Concluía que los signos de la crisis se acumulaban, y frente a ellos el más visible era la decadencia del rol presidencial. Puesta a analizar la situación económica concluía que las corporaciones involucradas en el Pacto Social eran crecientemente incapaces de garantizar la fidelidad de sus representados y que el Estado carecía de poder arbitral. Si bien la culpa recaía principalmente sobre el movimiento peronista, la revista condenaba una cultura

política deseosa de sortear todo obstáculo mediante una ruptura institucional (*Criterio*, 14 de agosto de 1975: 422).

Gran parte de los representantes de la economía y las finanzas coincidían con el diagnóstico. Uno de los principales ideólogos del librecambismo vernáculo afirmaba que los sindicatos ya controlaban las más grandes organizaciones industriales del país y que poco faltaba para que procedieran como soviets²². Los empresarios salieron a defenderse de las amenazas con que el gobierno intentaba combatir el mercado negro. Las principales corporaciones del capital se unieron en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), cuyo explícito objetivo era oponerse al gobierno. A principios de 1976, la misma entidad organizó un *lock-out* patronal de significativo éxito. Las declaraciones golpistas se sucedieron mientras un conjunto de instituciones cívico militares *sui generis* poblaban de solicitadas las páginas de los principales matutinos. En ellas se repetía una fórmula conocida: mientras se llamaba al golpe se invocaba la “lucha por el restablecimiento y la vigencia de los principios inmutables consagrados por la Constitución Nacional de 1853”²³. El antiperonismo reveló, una vez más, su productividad unificadora.

En suma, ya hacia mediados de 1975 la atención de estos liberales conservadores se ocupaba, sobre todo, del derrotero del gobierno justicialista y de las demandas de los sindicatos. No era el desafío impuesto por la lucha armada sino la amenaza sindical a la continuidad del capitalismo argentino lo que estaba en cuestión. La consolidación de un esquema social que conspiraba contra la “ética del esfuerzo y el sacrificio”, el “canibalismo económico” que distribuía sin crecer y el desequilibrio de un manajo de variables económicas se entrelazaban, según los liberales, en las dificultades para fijar precios y salarios. Eran justamente estas dificultades y la “voracidad” gremial lo que se percibía como principal desafío al orden y la propiedad.

En este arco de preocupaciones, la guerrilla sólo despertaba comentarios marginales que, en general, insistían sobre sus derrotas y sobre la indiferencia o repulsión que despertaba en la población. Dando por sentada una condena generalizada, puesta de manifiesto por la campaña “antisubversiva” apoyada por oficialismo y oposición, el discurso liberal se orientó a discutir las estrategias más adecuadas para encarar una represión legal y efectiva. Frente a los sucesos de Monte Chingolo²⁴, *La Nación* descubrió uno más de “los tremendos fracasos de las organizaciones del terror, del mismo modo que suponen el afianzamiento de las operaciones militares, apoyadas por la policía” (26 de diciembre de 1975: 6). *La Prensa* se ufanaba de haber sido una de las voces más consecuentes en la condena de la guerrilla. Pero ahora, el relato minucioso de la crueldad de los participantes era sustituido por el énfasis en el talento y la destreza de los militantes. El rechazo de la comunidad también era afirmado con beneplácito (*La Prensa*, 26 de diciembre de 1975: 6). El interés de *Criterio* apuntaba en dos direcciones: por un lado, a la necesidad de guiar la lucha antisubversiva por principios cristianos, la vida del hombre y su integridad debían estar por encima de todo. Por otro, a la condena de los sectores nacionalistas de derecha que desde dentro y fuera de la Iglesia veían en la represión una “guerra santa” (22 de enero de 1976: 3-7).

El círculo parecía cerrarse. Iniciada con el Cordobazo, en mayo de 1969, la disgregación del consenso antiperonista volvía a desembocar en la condena al movimiento de Perón. Tímidos y militantes, los comentaristas de *La Nación* y *La Prensa* intuyeron y jugaron a favor del golpe. *Criterio*, en cambio, lo reconoció como probable pero intentó, hasta entrado marzo de 1976, mes del golpe de estado, propiciar una recomposición dentro del sistema político vigente (11 de marzo de 1976: 99-102).

En este contexto, liberales, conservadores y nacionalistas de derecha coincidieron en que la desintegración social se cernía en la Argentina y en que el justicialismo, al desplomarse, arrastraría consigo a las preciadas instituciones políticas y económicas legadas por los padres fundadores²⁵. Ahora bien, mientras los liberales condenaban, hacia principios de 1976, tanto a las organizaciones armadas de izquierda como a las de derecha, y llamaban a las fuerzas armadas a encarar una represión bajo los principios de la ley, los nacionalistas se alistaron en una guerra santa y sucia, perpetuando una faena que ya respaldaban con los operativos terroristas de la Triple A²⁶. El silencio y la compli- cidad que acompañaron al Proceso (1976-1983) no pueden, claro, dejar de mencionarse.

La década del noventa

La restitución del orden liberal

Comulgando con los postulados del liberalismo económico, la política implementada por el proceso militar en 1976 proclamó perseguir la eficiencia y la modernización de la estructura productiva. Sus resultados, en cambio, fueron el estancamiento económico, la desindustrialización y un fuerte endeudamiento externo. El terrorismo de estado, con su estela de desapariciones masivas y de violencia llevada al paroxismo, acompañó e hizo posible el desmantelamiento. El modelo de acumulación y la matriz de organización social prevalecientes desde la segunda posguerra fueron dañados mortalmente. Su definitiva reformulación, no obstante, se demoró toda una década.

El gobierno constitucional que asume en 1983 concentró sus mayores esfuerzos en la transición democrática. Restituyó, con un discurso fuertemente moral, los derechos y garantías perdidos durante la dictadura y restauró la legitimidad de las instituciones como marco para la convivencia. Aunque inicialmente la administración radical intentó reproducir una política económica similar a la implementada por su partido en los años '60, a poco de andar debió negociar con los organismos internacionales de crédito e inaugurar una "economía de guerra". Gran parte de las medidas tendientes a la reformulación de raíz de la economía comenzaron a discutirse en esos años. Pocas, sin embargo, fueron efectivamente adoptadas. Hacia fines de los años '80, el elenco radical encontraba severas dificultades para controlar la inflación y restablecer el crecimiento. El deterioro siguió profundizándose hasta desembocar en los picos inflacionarios de 1989.

En este contexto crítico, un candidato del peronismo investido de toda la retórica tradicional ganó las elecciones presidenciales. Según Gerchunoff y Torre (1996), el gobierno de Menem debió enfrentar dos desafíos. En primer lugar, la crisis macroeconómica y la crisis fiscal que recortaban márgenes de maniobra al Estado. En segundo lugar, el problema de la credibilidad por parte del establishment frente a un candidato nacido de las entrañas del populismo que acentuaba la incertidumbre y alimentaba la espiral especulativa e inflacionaria. La respuesta fue apostar, sin dilaciones, por un giro drástico.

El Plan de Convertibilidad implementado desde 1991, la privatización de los servicios públicos, la desregulación de la economía y la apertura comercial fueron el pivote de las transformaciones. La Argentina pasó de un sistema semicerrado con fuerte presencia estatal a un modelo abierto que prioriza los mecanismos del mercado. El partido que durante décadas había defendido la distribución progresiva del ingreso, la industrialización sustitutiva como medio de desarrollo económico autónomo y la intervención estatal como principal reguladora de la economía, fue también el que aplicó al pie de la letra las medidas encarnadas en el Consenso de Washington.

Sólo una acumulación de poder político sin precedentes viabilizó semejante emprendimiento. Para impedir que la insubordinación militar ensombreciera su mandato, el presidente Menem indultó a quienes habían sido condenados durante el gobierno anterior por la violación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, apeló a la lealtad peronista para acallar a los opositores al interior de su propio movimiento; en una hábil combinación de premios y castigos, el presidente supo conservar el control del justicialismo, con mínimas resistencias. La mayoría parlamentaria, la inédita apelación a los decretos de necesidad y urgencia, la conformación de una magistratura políticamente adicta y una oposición muy debilitada le permitieron gobernar con la suma del poder público.

Los logros en materia macroeconómica, específicamente el control de la inflación y el aumento significativo del producto, le granjearon al gobierno el apoyo de gran parte del electorado. El gobierno del presidente Menem no sólo salió airoso de todas las elecciones que prosiguieron a la de 1989 sino que obtuvo el acuerdo de la oposición para reformular la Constitución y alcanzar la reelección.

No analizaremos aquí las falencias económicas del programa implementado. Basta mencionar que la vulnerabilidad externa, las dificultades de la industria local para competir internacionalmente, y el endeudamiento, se acentuaron. Los efectos sobre la estructura social fueron aún más visibles. Hacia 1999, la cifra de desempleados había escalado a dos millones (Kritz, 1999) y apenas un 10% contaba con seguro de desempleo (Monza, 1999). Esta realidad repercutió negativamente sobre las condiciones de trabajo de los ocupados. El recorte en las remuneraciones, la precarización de los contratos y la reorganización de las tareas fueron algunas de sus consecuencias inmediatas. Como contrapartida, la desigualdad social y los hogares pobres se incrementaron persistentemente a lo largo de toda la década.

En relación con la masividad y frecuencia de los paros realizados inmediatamente antes y después de la dictadura, y con los efectos regresivos de la reestructuración económica, las huelgas acaecidas durante el gobierno de Menem fueron llamativamente escasas.

Incapaces de revertir el debilitamiento de la estructura industrial y de confrontar las reglamentaciones que limitaban los aumentos salariales a incrementos en la productividad, los sindicatos tuvieron, según Murillo (1997), tres grandes reacciones. Algunos (representados por el Congreso de Trabajadores de la Argentina, CTA, y el Movimiento de Trabajadores de la Argentina, MTA) intentaron resistir las reformas; otros (la Confederación General del Trabajo, CGT) negociaron demandas específicas pero aceptando el proceso general, y dentro de estos últimos, un grupo intentó adaptar sus organizaciones aprovechando las nuevas actividades lucrativas creadas por el nuevo escenario.

Desde 1992 existen dos centrales sindicales, y una de ellas, la CTA, ha renegado de su alineamiento con el peronismo y se ha opuesto desde su creación a la política económica implementada. Los grandes sindicatos por su parte cifraron su capacidad de intervención a nivel político en la resistencia a la flexibilización laboral y el rechazo a la desregulación de las obras sociales. La flexibilización tan arduamente negociada en el ámbito legislativo se imponía con peso propio en la realidad. En este primer frente, el sindicalismo cedió posiciones con respecto a la reforma laboral a cambio de preservar el control de las obras sociales y la renegociación de sus deudas. Las alternativas escogidas desembocaron en lo que Alonso (1996) identifica como un círculo vicioso: las concesiones otorgadas al poder político para no ceder el control de las obras sociales contribuyen a debilitar aún más el poder estructural de los sindicatos y a volverlos más ilegítimos frente a la sociedad y más dependientes de los recursos organizacionales.

Durante la primavera del plan de convertibilidad, los escasos reclamos obreros tendieron a repetir esquemas tradicionales, luchando por una mejor distribución de la riqueza en una etapa en que la demanda y el consumo interno se expandían. Con el correr del tiempo, las explosivas tasas de desocupación aplacaron estos reclamos y propiciaron otros más ligados a los cierres de fuentes de trabajo. También el número de adherentes y las movilizaciones disminuyeron. Estas tendencias se revirtieron parcialmente a partir de 1994.

La reducción inicial fue, a su vez, acompañada por la desagregación de los conflictos. Fueron los ámbitos laborales circunscriptos o los sindicatos locales y regionales los que detentaron mayor actividad. Perseverando en una tendencia iniciada en los '80, el incremento de la conflictividad tuvo lugar sobre todo en los sectores de la administración pública y en servicios sociales y personales. En la década de los '90, se registraron nueve huelgas generales. Éstas no lograron diluir las diferencias entre las centrales gremiales, sino que fueron expresión de su conflicto. La mayoría de estas medidas, por su parte, tuvo por objeto el repudio a la política económica del gobierno, la exigencia de mejores condiciones de trabajo y el pedido de creación de nuevos empleos. Los aumentos salariales, entre tanto, desaparecieron de las exigencias gremiales.

A fines de 1993, el país presenció una nueva forma de protesta: el Santiago. Con él, se inauguraron una serie de “estallidos provinciales” directamente vinculados con los procesos de reforma estructural emprendidos por las gobernaciones e impulsados por la administración nacional. Cumplido el ajuste en las zonas más urbanizadas e industrializadas, el gobierno comenzó a presionar para que las regiones periféricas iniciaran la reestructuración de su aparato público.

Luego de Santiago del Estero, las provincias de Jujuy, San Juan, Córdoba y Río Negro presenciaron este tipo de estallidos. Según Farinetti (1998), los actores involucrados fueron asalariados del sector público apoyados por porciones importantes de la población local, y sus demandas remitían a la defensa del trabajo y el salario. El modo de expresión fue la movilización y concentración callejera acompañadas por atentados a símbolos propios de la vida política y ataques al domicilio de los dirigentes locales. Se trató de hechos de carácter episódico y espontáneo que, excepto en Jujuy, no derivaron en movimientos políticos articulados y estables. Sus destinatarios eran el gobierno provincial y la clase política, acusados de la decadencia moral y los atropellos padecidos.

A estas manifestaciones se agregaron los “cortes de ruta”. El caso de Central Cór y Plaza Huincul (junio de 1996) fue el más sobresaliente, pero esta práctica se extendió. Jujuy, Cruz del Eje, Belén, Orán y Montero padecían todas ellas altos niveles de desocupación, como resultado, en general, del retiro de alguna gran empresa pública. En este caso, quienes cortaron las rutas no fueron empleados estatales sino desempleados apoyados por asociaciones intermedias y con una presencia notable de mujeres y jóvenes. Las exigencias se orientaron a soluciones puntuales en materia de empleo, y su expresión característica fue el corte de rutas nacionales, acciones notablemente coordinadas y con fuerte presencia de los medios de comunicación. El destinatario era, en estos casos, el Estado nacional y sus instancias competentes.

Gran parte de las movilizaciones colectivas acaecidas en estos años tuvieron como foco reclamos concretos directamente ligados a los derechos ciudadanos. Los movimientos contra la violencia institucional y en reclamo de justicia, las manifestaciones en defensa de la educación pública y la dignificación del salario docente, el movimiento de Memoria Activa por los atentados a la Mutual Israelita (AMIA) y la Embajada de Israel tuvieron un papel insoslayable en la agenda política nacional. Como tales reclamos se asientan en los principios mismos del liberalismo conservador y no suponen necesariamente cuestionamientos ni críticas a la organización económica, social y política que éste propone, no serán considerados a los fines del presente trabajo.

En síntesis, los reclamos de la sociedad argentina adquirieron un carácter más puntual y defensivo. Por un lado, las estructuras sindicales se dividieron y debilitaron, con estrategias políticas diversas, pero igualmente impotentes para contener la caída de las remuneraciones y la reestructuración de las condiciones de trabajo. Por otro, los principales focos de conflicto fueron las protestas sociales, mucho menos institucionalizadas y mucho más espontáneas que las prácticas contestatarias de otrora. Los reclamos de estas últimas no

cuestionaron el sistema de dominación ni se orientaron al reclamo de mejores ingresos o mejores condiciones de trabajo. Solicitaron empleo, el pago de salarios adeudados, la satisfacción de las necesidades más elementales.

Aunque incapaz de consolidarse políticamente por la concentración del poder en la figura del presidente y el constante avasallamiento de las instituciones republicanas, el liberalismo conservador se ha impuesto de modo drástico en materia económica. El retiro del Estado y el predominio de los mecanismos del mercado son una realidad en la Argentina de hoy. Un claro indicio de ello es que se han modificado sustancialmente las reglas y prácticas que orientan a los principales actores económicos. Al compás de estas transformaciones, la capacidad de presión de los sectores perjudicados se ha visto menoscabada. Exceptuando las huelgas y las protestas sociales en el interior del país, el costo social del nuevo orden parece dirimirse en el plano individual.

El retorno del liberalismo

De la sorpresa a la pleitesía

Las elecciones presidenciales y la transmisión del mando en 1989 encontraban una vez más a la Argentina en una profunda crisis institucional. Los picos hiperinflacionarios atentaban contra los intercambios mercantiles más elementales y sumían a la economía local en un estado de conmoción que precipitó una sucesión de saqueos a comercios y supermercados en el interior.

En este marco, fue un candidato peronista quien resultó victorioso. Al analizar "la respuesta de las urnas", *La Prensa* asumió un tono escéptico y desencantado. Culpaba a Alfonsín por la renovación "estéril" de los antagonismos del pasado, condenando, sin eufemismos, el espíritu con el cual el gobierno de la transición había propiciado el juicio y la condena de los militares por crímenes de lesa humanidad. Sólo en segundo lugar el matutino criticaba a la administración radical por haber sido incapaz de contener la corrupción administrativa, haber aumentado el déficit fiscal y la ineficiencia de las empresas estatales, y haber agudizado la depreciación de la moneda, el alza del costo de vida y el empobrecimiento general de la población (todas las citas corresponden a *La Prensa*, 18 de mayo de 1989: 8).

En tanto *La Prensa* asignaba a la cuestión militar una importancia sustantiva a la hora de evaluar la gestión del gobierno, *Criterio* procedía de manera semejante al analizar la política cultural y el "laicismo decimonónico" del elenco alfonsinista. En este sentido, criticaba

"...una especie de libertad natural que más se asemeja al ideal anárquico de la libertad que al ideal liberal de libertad civil, fomentando un individualismo asocial y egoísta que termina amenazando la misma libertad responsable."

Los fallos de la Corte Suprema respecto al matrimonio civil y la tenencia de drogas, la selección y difusión de ciertos espectáculos cinematográficos y

televisivos eran denunciados como parte de una conciencia que postula que “el Estado no puede abrazar una moral particular”. Asimismo, la publicación católica se ocupaba de enfatizar los avances en materia política e institucional, concluyendo, sin embargo, que la situación social y económica presentaba “más fracasos que logros” (todas las citas corresponden a *Criterio*, 27 de abril de 1989: 147-149). La incapacidad presidencial para conjurar la crisis y las manifestaciones “frívolas” de sus incondicionales sólo podían deparar al gobierno un “triste y resignado final” (*Criterio*, 22 de junio de 1989: 219).

La Nación, por su parte, endilgaba la derrota del radicalismo a “la gestión indudablemente poco feliz” del gobierno. Con un tono más elusivo que sus pares, consideraba que Alfonsín había cometido “desafortunadas acciones” en asuntos tales como la política exterior, la cuestión militar y la cultura. La conducción económica era calificada como “profundamente errónea” (todas las citas corresponden a *La Nación*, 16 de mayo de 1989: 6).

Este escenario había permitido al justicialismo alcanzar el poder por cuarta vez.

Profundamente decepcionadas por la gestión radical y enfrentadas una vez más a los herederos de Perón, las editoriales liberales se esforzaron por delinear un programa de gobierno que se imponía “con la irrefragable fuerza de los hechos”; para sorpresa de sus defensores primigenios, el nuevo gobierno lo cumpliría al pie de la letra.

La Nación insistía en el carácter perimido de las “tendencias intervencionistas, reguladoras, estatizantes y falsamente distributivas de riquezas inexistentes” e instaba a reemplazarlas por “camino diferentes, sobre la base de la libertad y el estímulo a la iniciativa privada (...) a fin de que los sectores populares encuentren alivio a sus necesidades y el país todo el destino de progreso y crecimiento anhelado” (16 de mayo de 1989: 6). Para el diario, “la cuenta regresiva ha llegado a cero” (*La Nación*, 23 de mayo de 1989: 6). Con un espíritu casi épico concluía

“... La Argentina padece el final de una etapa y el alumbramiento de otra. Parecería que esa etapa que se extingue, caracterizada por un Estado macrocefálico y liberticida y gobiernos demagógicos y populistas, se resiste a abandonar el campo, mientras las fuerzas de la libertad que pugnan por trabajar sin obstáculos, sin dirigismos, paternalismos ni burocracias asfixiantes no pueden todavía, abrirse paso para desplegar el caudal de su inteligencia y su esfuerzo” (*La Nación*, 25 de mayo de 1989: 8).

Criterio misma, tan renuente a abordar cuestiones económicas, se plegaba al coro liberal y acercaba imperativos convergentes a los postulados por las publicaciones centenarias.

“Todo nuestro sistema económico está plagado de estructuras de pecado que es preciso extirpar si aún se cree, como nosotros creemos, que es posible instaurar un orden económico-social regulado por los ideales de justicia y solidaridad, que reconozca la plenitud del *derecho a la iniciativa* y del *trabajo*, que premie la laboriosidad y no la holgazanería, la

austeridad y no el dispendio, el ahorro y no el consumo desenfrenado y sin sentido” (*Criterio*, 22 de junio de 1989: 219; el énfasis corresponde al original).

Con la llegada de Menem al gobierno, la prensa liberal tradujo en sus páginas un gozoso asombro. Al analizar el mensaje presidencial pronunciado frente al Congreso, *La Nación* desbordaba de optimismo y prestaba espacio con profusas citas textuales a la voz del nuevo mandatario. Como signo de la reconciliación, el diario concluía que las palabras de Menem eran dignas de ser suscriptas por los grandes nombres de la organización nacional: Mitre, Sarmiento y Avellaneda (*La Nación*, 11 de julio de 1989: 6).

También la actitud de *La Prensa* frente al peronismo y al nuevo presidente cambiaron sustancialmente. No sólo las medidas económicas perseguidas y los esfuerzos del partido por plegarse a los postulados del credo liberal, sino también el indulto a los jefes militares condenados, auspiciaron la reconciliación con el matutino de Paz. Como contracara de un Alfonsín que el diario condenaba a la cofradía de los presidentes fracasados, Menem se erguía como líder que había sabido pasar “por encima de sus particulares intereses para reflexionar sobre los grandes problemas de la comunidad”. Tras el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, el diario constataba punto por punto el advenimiento del orden tantas veces invocado desde su tribuna. La “política de reconciliación” entre civiles y militares, las concepciones sobre el Estado y la economía, la atención a los compromisos con los acreedores internacionales, los esbozos de la nueva política exterior, despertaban en su prosa regocijo (*La Prensa*, 12 de julio de 1989: 8).

Incluso *Criterio* comentó entre sorprendida y esperanzada la línea política del nuevo gobierno. Consideraba que el camino emprendido era “el más adecuado para que la Argentina pueda encontrarse con el crecimiento económico y la justicia social” y advertía que en este nuevo marco normativo “las mentalidades y las oportunidades rentísticas, cortoplacistas y prebendarias” se verían obligadas a cambiar de raíz (*Criterio*, 28 de septiembre de 1989: 363-366).

Con el correr de los años, el apoyo irrestricto brindado al presidente por parte de la prensa liberal y las principales corporaciones del capital²⁷ se acentuó. Los recelos despertados por el pasado autoritario y discrecional del peronismo eran relegados a un segundo plano mientras el optimismo y, por momentos la obsecuencia, inundaban los comentarios editoriales. *La Prensa* y *La Nación* se dedicaron con ahínco a secundar discursivamente las medidas económicas implementadas por el primer mandatario y a invalidar los reclamos de los descontentos y de los sectores del peronismo que amenazaban con retrotraer al presidente a su identidad justicialista. *Criterio* se sumió en un profundo letargo que despreció el análisis político para consagrarse casi exclusivamente a cuestiones religiosas y espirituales. Será recién hacia 1994 que la publicación católica retomará la atención por la vida pública y, junto a los medios centenarios y a cierto despertar de la oposición, alzará su voz para criticar algunos aspectos del partido gobernante.

Los conflictos laborales o el sabor de la revancha

La primera huelga general convocada por la CGT sirvió de excusa a los matutinos para reflexionar sobre las estructuras sindicales. Bajo un comentario editorial titulado "Indiferencia general", *La Prensa* concluyó que estaba frente a un "hito en la historia del corporativismo argentino". Consideraba que por primera vez en cincuenta años un paro había pasado virtualmente desapercibido. Imputando irrepresentatividad a la convocatoria, el diario de Paz la consideraba un "rotundo fracaso": ni siquiera quienes se habían ausentado compartían las consignas de la medida. Algunos habían sufrido la merma de transportes, y los más habían aprovechado la posibilidad de disfrutar un fin de semana prolongado.

Puesta a evaluar las causas de semejante resultado, el comentario se centraba en dos grandes cuestiones, las características de la Confederación General del Trabajo y una profunda mutación en las orientaciones de la población. En el primer caso, el periódico consideraba evidente que la intervención de la CGT estaba inspirada en intereses políticos y no gremiales. Se trataba de una "pulseada" con el gobierno (tal el titular de su portada) por el control de las obras sociales y los espacios de poder. En el segundo caso, la sociedad percibía el aumento del nivel de vida y había comprendido que nada se obtiene con la huelga (equiparada con frecuencia a la holgazanería). De este modo, su conclusión afirmaba

"... hoy ha quedado claro que las reiteradas 'defensas de los derechos obreros', practicadas por la CGT están en la raíz de los males económicos que sumieron en la postración a la Argentina, con un potencial de explotación inagotable. (...) A la pobreza se la supera con trabajo. Esa fue la respuesta que la CGT irrepresentativa por negar la democracia interna obtuvo de la sociedad" (todas las citas precedentes corresponden a *La Prensa*, 15 de noviembre de 1989: 8).

Días más tarde el matutino celebraba que existiera una "incompatibilidad absoluta" entre los intereses del gobierno y los intereses de la CGT. Mientras el primero se identificaba con el bienestar general perseguido por la política económica, los integrantes de la central obrera conservaban posiciones y planes "obsoletos" que daban cuenta de una "explotación obrera de origen no patronal". En este sentido, *La Prensa* concluía que las diferencias en la calidad de vida de los trabajadores europeos o norteamericanos y los argentinos se asentaban en la política laboral que había ejercido la dirigencia gremial durante las últimas cuatro décadas. Perseverante en una tarea desempeñada desde los años cincuenta, el diario de Paz calificaba con desdén a los jefes gremiales con términos tales como "caciques ricos en mañas y añagazas", "sindicalismo argentino caracterizado por la violencia y la corrupción", "tiranía sindical cuna de una dirigencia corporativista que se resiste a abandonar la caja, la tesorería, y a renunciar a los halagos del poder". Alimentando el desencuentro entre el poder ejecutivo y sus otrora aliados, el editorial agujijoneaba:

"El ministro de Trabajo ha dicho... que 'la CGT no tiene ideas nuevas', con lo que se ha quedado corto. Debió decir, simplemente que no tiene

ideas; no las tiene hoy ni las ha tenido ayer. Más allá de las frases hechas, de los epítetos contra el adversario, de las adulaciones y zalamerías de rigor, adiestrada sólo para vivir y aplaudir, nunca exhibió un perfil siquiera de pensamiento elaborado en torno de lo que debiera ser su función específica, esto es, el planeamiento y defensa de los intereses legítimos de los trabajadores, que para ser creída y benéfica debió haber comenzado por proclamar su autonomía del Estado” (las citas corresponden a *La Prensa*, 22 de noviembre de 1992: 8).

De un modo semejante, *La Nación* se regocijaba del debilitamiento sindical. El matutino insistía en el desprestigio del sistema sindical y, muy especialmente, en el de su elenco dirigente. El paro revelaba una doble paradoja: por un lado, los trabajadores a los que se presumía representar serían, al fin, los únicos perjudicados por los descuentos por ausentismo; por otro, el gobierno salía fortalecido y confirmaba una vez más la pertinencia de su línea económica. El periódico concluía que la huelga era expresión de una estructura “retardataria” (*La Nación*, 11 de noviembre de 1992: 6).

Con el correr del tiempo, los conflictos gremiales captaron un desdenoso y escueto interés de los comentaristas de *La Prensa* y *La Nación*. La intención de ambos versó en apoyar las reformas de flexibilización laboral y en alimentar el divorcio entre gobierno y sindicatos.

Al examinar la fractura gremial y la emergencia de sindicatos no peronistas, *La Prensa* mostró beneplácito por las divergencias y perseveró en sus críticas a los gremios justicialistas. Los argumentos enunciados en relación con la primera medida de fuerza convocada en 1992 se repitieron en todas las subsiguientes. El carácter político de las intervenciones de la CGT, el oportunismo y corrupción con el que manejaron las oportunidades abiertas por las privatizaciones y desregulaciones, la burocratización y violencia de sus dirigentes y la inutilidad de las estrategias confrontativas se entremezclaron, inundando una y otra vez los editoriales (*La Prensa*, 25 de julio de 1994: 8; 6 y 13 de septiembre de 1995).

Similar espíritu animaba a los comentaristas del diario de Mitre. La única razón que explicaba el sostenimiento del “irracional estatuto legal” de los sindicatos eran las necesidades político-electorales del oficialismo. Lo apropiado para una sociedad “moderna” era destituir las trabas que impiden la libertad de asociación y la democracia interna dentro de los gremios (*La Nación*, 12 de julio de 1994: 8). Con insistencia, las tribunas liberales se encargaban de recordar el carácter heterogéneo y “político” (progresivamente identificado con espurio y mezquino) de las críticas alzadas hacia el gobierno. Eran las “peores tradiciones reivindicativas de la política local” lo que quedaba en evidencia. Y, en lugar de críticas válidas, se descubría la “apelación a los resortes emocionales típicos del populismo vernáculo”. De este modo, al comentar la Marcha Federal, una de las manifestaciones de protesta más numerosas efectuadas al gobierno de Menem, *La Nación* concluía

“Las manifestaciones en apoyo de determinado reclamo político o gremial son sin duda legítimas. Pero cuando lo que se reclama o se reivindica no es un beneficio social concreto sino un cambio global en la po-

lítica del gobierno –y, para colmo, sin formular soluciones de alternativa mínimamente viables–, la demostración se convierte, de hecho, en un ejercicio de pura retórica, cuando no en un intento indebido de promover una convulsión política para forzar o presionar a autoridades legítimas” (*La Nación*, 5 de julio de 1994: 8).

La misma heterogeneidad y vaguedad en las propuestas detectó el otrora diario de Paz. Aunque reconociendo en la Marcha Federal la existencia de “‘voces’ profundas que nacen de las justas protestas” y que merecían ser escuchadas “antes de que sea demasiado tarde” (título de la editorial), el matutino concluía:

“... se insiste en algunos aspectos de la orientación económica que, curiosamente, son los que encuentran mayor eco en la ciudadanía de todas las clases sociales a las que la hiperinflación, el estatismo hipertrofiado y el desbarajuste de los que precisamente los adherentes fueron sus permanentes sostenedores son experiencias traumáticas a las que no se desea regresar” (*La Prensa*, 10 de julio de 1994: 10).

En este marco, *La Prensa* llamaba al gobierno a no padecer de “complejo de inferioridad” frente a los dirigentes gremiales y opositores. Debía mostrarse enérgico y prescindente evitando facilitar el escenario para que se desarrolle este “espectáculo folklórico”. No obstante su satisfacción por la tranquilidad social, *La Prensa* reconocía la legitimidad de los desvelos proletarios y su “madurez y sacrificio”. De este modo, combinaba dos estrategias discursivas caras al liberalismo: la postergación de los reclamos y la ejemplaridad de los trabajadores pacientes.

“Confiamos en que este clima, si no de plena armonía por lo menos de sosiego en el ámbito laboral privado, aunque sea dictado por la necesidad y no como correspondería por el bienestar alcanzado, no se altere en un futuro inmediato. Creemos que con ello se impulsará el bienestar económico a que se aspira, y con él podrán satisfacerse las demandas por ahora forzosamente preteridas, de una gran parte de la masa laboral que se desempeña en el ámbito privado. Si los trabajadores del sector privado continúan con la positiva actitud que comentamos, habrán dado una saludable lección de responsabilidad y sacrificio a quienes todavía no la han aprendido” (*La Prensa*, 5 de julio de 1994: 10).

A cada avance gubernamental en materia laboral y gremial, los matutinos respondían gozosos de constatar el alcance del “giro histórico”. La flexibilización no sólo era identificada como única vía para combatir el desempleo sino también como signo de una modernidad a la cual el país debía integrarse (*La Prensa*, 26 de septiembre de 1996: 1).

Recién promediando el año 1997, el diario que había sido de Paz incluyó entre sus interlocutores al gobierno y los empresarios a la hora de analizar las condiciones de trabajo y los obstáculos para establecer una política de flexibilización consensuada. Citando las intervenciones de la Iglesia Católica, instó a unos y a otros a sentarse a dialogar con madurez. Sólo con el aumento del

desempleo y el incremento de las huelgas y protestas sociales, concluyó *La Prensa* que la negociación era una estrategia deseable.

“Nada de lo que se imponga en esta materia tendrá futuro si no surge del consenso de los tres protagonistas decisivos: el Estado, la empresa y el trabajador. Es hora de que todos ellos depongan algo de sus pretensiones para encontrar un camino viable y pacífico. De lo contrario, se estará jugando con fuego” (*La Prensa*, 27 de agosto de 1997: 13).

La Nación, en el pasado mucho menos intransigente, impugnaba ahora de modo más enérgico la representación sindical insistiendo en el carácter inútil y anacrónico de sus reclamos (versión en Internet, 15 de agosto de 1997).

Así, en materia sindical, los grandes diarios liberales favorecieron las acciones del oficialismo. A través de la actualización de críticas que habían esgrimido desde tiempos remotos y de la certera constatación de la debilidad de los reclamos gremiales, las editoriales del liberalismo se ocuparon de impugnar las demandas de los trabajadores e instaurar una conciencia en la cual sólo el estoicismo y el esfuerzo individual denodado constituirían estrategias válidas para obtener recompensas materiales.

La presidencia de Menem, por su parte, no halló control en la prensa adicta que, fascinada por el “giro histórico” tantas veces acariciado, evitó toda sugerencia o comentario que obstaculizara o ensombreciera la figura del presidente. De algún modo, el interlocutor de los editoriales dejaba de ser el gobierno, tan refractario a las palabras y aficionado al pragmatismo, y pasaba a ser un auditorio al que debía traducir y guiar por los caminos de la modernización. El silencio inicial frente al avasallamiento de ciertos mecanismos institucionales, los discursos a favor de una política realista (identificada con el gobierno) y el énfasis en la inexistencia de una alternativa viable sirvieron de apoyo o complicidad a la estrategia política del presidente. Recién promediando el primer mandato de Menem, hacia 1993, y sobre todo durante el segundo, con una oposición dispuesta a convalidar las medidas económicas de la administración peronista, la prensa tradicional se permitió recordar que las dimensiones republicanas del ejercicio del poder también formaban parte del ideario liberal y que la discrecionalidad del gobierno merecía ser contrabalanceada.

Estallidos provinciales, filantropía social e impugnación de la política

Paralelamente a las huelgas, el interior del país comenzó a ser escenario de convulsionadas protestas. La primera de ellas tuvo lugar en la provincia de Santiago del Estero y también en este caso los argumentos esgrimidos en 1993 se repitieron a lo largo de los diversos estallidos provinciales. Con excepción de *Criterio*, las causas no fueron imputadas a las medidas reformistas implementadas ni a la crisis de las economías regionales sino a la demora de la reestructuración y al caos financiero institucional que habían afectado a las provincias. La crítica a la ineficiencia administrativa y a la moral de los dirigentes locales se plegó a los reclamos de los propios participantes, considerándolos parcialmente legítimos. De este modo, *La Prensa* concluía:

“...el erario provincial... saqueado por el dispendio en provecho de un corrupto aparato político enquistado en una comunidad lugareña de escasos recursos económicos, constituye la más acabada muestra de una grave distorsión que afecta en mayor o menor grado, a una buena parte de las provincias argentinas. En ellas, el caudillismo y el comité, en sus peores expresiones, subsisten como una lacra que obstruye cualquier forma de desarrollo o de progreso” (*La Prensa*, 18 de diciembre de 1993: 8).

Una mirada igualmente crítica hacia los políticos locales era alentada desde la editorial de *La Nación*. Los desmanes producidos en Santiago del Estero eran producto del “desgobierno, la corrupción y el desorden administrativo a los que debía poner fin la intervención” (17 de diciembre de 1993: 8). La política económica, se repetía una vez más, “no debe ser negociada” (*La Nación*, 18 de diciembre de 1993: 8).

Plegándose parcialmente a las explicaciones propuestas por el gobierno, los comentaristas liberales identificaban la participación de “focos subversivos” y, como habían repetido veinte años atrás, insistían en que la legitimidad de los reclamos no podía servir de excusa para justificar la “algarada popular y los sangrientos sucesos ocurridos en la capital santiagueña”. La ira popular no podía de ningún modo tomar justicia por mano propia.

Con un comentario firmado por Juan Pablo Berra y publicado en marzo de 1994, *Criterio* presentaba una interpretación sobre el Santiagazo muy diferente a la esbozada por sus pares. Contra poniéndose a la visión de parte de la prensa y del gobierno, el sacerdote Berra diferenciaba detonantes mediatos e inmediatos y, además de décadas de corrupción e ineficiencia, constataba los efectos negativos del plan de ajuste impuesto por el gobierno nacional. El artículo afirmaba:

“Lo que el Gobierno no estaba dispuesto a admitir era la adhesión de todo el pueblo y que éste celebraba los fines conseguidos: agotados los recursos, las protestas y los reclamos, propinar un castigo ejemplar simbólico a los que por décadas les volvieron las espaldas y, a través del saqueo y quema de los signos de la democracia, mostrar que ésta también puede convertirse en tiranía por el mal desempeño de sus funcionarios y la aplicación de planes económicos y sociales deshumanizantes” (*Criterio*, 10 de marzo de 1994: 59).

El centro del análisis estaba puesto en la “lección” que la Iglesia debía extraer de acontecimientos semejantes. Desde el punto de vista del autor, la comunidad católica no podía permanecer indiferente a este tipo de conflictos: era preciso acompañar a los desposeídos y advertir a quienes conducen los destinos colectivos. La credibilidad de la Iglesia reposaba, según Berra, en su destreza para evitar ser “absorbida o mimetizada, manteniendo la suficiente distancia del poder político como para criticarlo desde el Evangelio”.

Tal como en el caso de Santiago del Estero, las imágenes sobre los sistemas políticos provinciales y la presunta participación de “provocadores” (*La Prensa*, 23 de septiembre de 1995: 13) se repitieron en los comentarios de *La*

Prensa y La Nación en torno de otros estallidos. La irresponsabilidad de los políticos comprometidos en objetivos irrealizables, la mala administración y la falta de habilidad política de las autoridades para camppear los conflictos fueron las principales causas señaladas por los periódicos centenarios (*La Nación*, versión en Internet, 26 de junio de 1996; 14 y 16 de abril de 1997; y *La Prensa*, 25 de septiembre de 1995: 13). Ahora bien, de modo semejante a lo ocurrido con las huelgas, *La Prensa* demostró mayor sensibilidad que *La Nación* con los conflictos, alertando a las clases dirigentes sobre los peligros de seguir descuidando el bienestar material de un porcentaje importante de la población. Desde un punto de vista similar pero con invocaciones más espirituales, *Criterio* se preguntaba hacia mediados de 1997: “¿no estaremos jugando con fuego?” (12 de junio de 1997: 221).

Como en el pasado, las plumas liberales otorgaban legitimidad a los conflictos sociales al costo de inscribir los reclamos en los imperativos defendidos por sus tribunas. Para los diarios centenarios, el fundamento de las protestas radicaba o bien en la falta de idoneidad de los políticos o bien en el carácter incompleto de las transformaciones económicas y administrativas en curso. Si bien *Criterio* mantuvo siempre una mirada más acusatoria para con el gobierno nacional y la “nueva oligarquía” “ostentosa” y “frívola” que lo acompañaba (14 de septiembre de 1995: 474; 28 de septiembre de 1995: 507-509 y 27 de junio de 1996: 289-291), se limitó a propiciar “el ajuste con rostro humano” que también inundaría, en la segunda mitad de los ‘90, los discursos de los organismos internacionales²⁸ y de la oposición. Para la publicación católica, los estallidos ponían de manifiesto la indiferencia de la sociedad de fin de siglo por la suerte de los más necesitados.

Con respecto a las consecuencias políticas de las protestas, los editoriales constataban la crisis de representación de los partidos políticos y el descrédito de sus dirigentes mientras defendían el carácter no negociable de los lineamientos impuestos por el Ministerio de Hacienda. El vínculo entre desaprensión o violencia política y subordinación de las decisiones a imperativos económicos, o dicho de otro modo, las contradictorias exigencias impuestas a los políticos, no merecieron siquiera referencia.

En la disección entre economía, malestar social e indiferencia política se asentaba toda la argumentación. Justamente, fue en clave filantrópica y jurídico-institucional que se procesaron las críticas al modelo del gobierno de Menem. En el primer caso, mientras los acontecimientos contestatarios de la capital y el interior del país despertaron comentarios editoriales escuetos, la “cuestión social” poblaba las tribunas liberales, con ejercicios descriptivos diversos y fórmulas compensatorias centradas en la buena administración de los fondos sociales²⁹. Con respecto a los políticos, se propiciaron liderazgos “ejemplares”, éticamente correctos y respetuosos del régimen jurídico liberal. Las tibias críticas al presidente Menem en 1995 y el caluroso recibimiento que prestaron a la figura de De la Rúa³⁰ dieron muestras de este doble espíritu. Como intuyera un analista en 1990, equiparando a Menem con Urquiza, éste representaba una figura bisagra, de transición entre una Argentina de caudillos telúricos y un país institucional, liberal y conservador. A Urquiza, argumentaba, seguiría un Mitre.

Sin dudas, el presidente De la Rúa, elegido en 1999, de antecedentes moderados, proveniente de un partido político centenario identificado con la defensa del entramado constitucional y hasta con una estética cercana a la de los conservadores pampeanos, es más afín a las tradiciones liberales vernáculas. Uno de los interrogantes que inaugura la Argentina postmenemista es el de la aptitud del liberalismo conservador argentino para prescindir de la discrecionalidad y el populismo que lo acompañaron por casi una década.

A modo de conclusión: política y liberalismo conservador

En el itinerario que recorrimos, optamos por considerar al liberalismo no como un conjunto doctrinario sino como un dispositivo ideológico constituyente de identidades y conductas y, como tal, productor de sentido en la interpretación de la realidad. Para estudiarlo nos propusimos considerar dos momentos críticos y contrastantes: la crisis de dominación social y política de los tempranos años '70, y la restitución del orden económico liberal en la última década del siglo XX.

La importancia de la prensa liberal conservadora en el primer momento es indudable. Se trataba de una tribuna privilegiada del pensamiento antiperonista, heredera de un pasado ilustre que no dudaba en esgrimir contra sus adversarios. La "prensa seria", refugio de la Argentina conservadora, canonizada por su larga historia, merecía la lectura reverente de un público nutrido. Sus editoriales contenían un fuerte espíritu de intervención, una retórica encendida, por momentos plena de ironía y desdén, y el matiz aristocrático de quienes se creían naturalmente dotados para la conducción. Veinte años más tarde, la recomposición del viejo sistema de partidos (con la desaparición de las fuerzas armadas como alternativa de gobierno y el giro ideológico peronista), la expansión de los enunciadores liberales y la reorganización del mercado cultural en la Argentina, han redefinido su papel.

En 1989, una encuesta sobre la distribución de las preferencias electorales por diario (Sidicaro, 1993: 508) revelaba que los votantes liberales estaban sobrerrepresentados en *La Prensa* y *La Nación*. Cabe preguntarnos qué ha sucedido con esos lectores-sufragantes, esa prensa y ese liberalismo diez años después.

Es evidente que la adopción de una línea económica liberal por parte del gobierno justicialista ha bastado para sellar una alianza en la cual la conveniencia mutua supo diluir viejos antagonismos. En este sentido, las nuevas fracciones privilegiadas parecen mucho más preocupadas por sus intereses materiales que por un conjunto de principios y valores de alcurnia. Acompañando este desplazamiento, las huellas populistas y la discrecionalidad en el ejercicio del poder, tan criticadas al peronismo en el pasado, dieron lugar a una actitud obsecuente primero, y muy matizada después. Mientras el gobierno de Menem traducía en políticas concretas una línea contraria al sindicalismo, al asistencialismo estatal, a la intervención económica, a la "demagogia" y a los sectores populares, se convertía en un fetiche exotizante y caricatures-

co reconocido con simpatía por los argentinos de los estratos superiores. En el marco de un populismo conservador, la administración menemista redundó en un deterioro crítico de la equidad social y en una estética cargada de la simbología ritual del peronismo clásico. Simbología que fue acogida con un paternalismo risueño por muchos de quienes la habían despreciado durante décadas.

Este apoyo *sui generis* no debe engañarnos. Si algo caracteriza al aburguesamiento de las identidades políticas de los sectores privilegiados, es la volatilidad de sus alianzas. Es un modelo social el defendido, no sus coyunturales gestores. En cuanto el gobierno de Menem consolidó un nuevo esquema de organización económica y social y la oposición reveló su voluntad de persistir en esta línea subsanando las desprolijidades jurídico-institucionales y las deudas filantrópicas del oficialismo, las preferencias partidarias de los sectores superiores de la escala social se desplazaron.

En el marco de estas nuevas relaciones sociales, la prensa liberal sufrió modificaciones significativas. Los diarios centenarios debieron confiar más en sus estrategias comerciales que en la fidelidad de una tradición en la cual los jóvenes lectores heredaban de sus padres las preferencias periodísticas. Bajo las exigencias de un mercado mediático más competitivo y con afinidades ideológicas menos marcadas, la línea editorial fue perdiendo importancia como argumento de marketing y consumo. Así, *La Prensa* dejó de ser propiedad de la familia Paz y con la misma vehemencia con que proclamara su antiperonismo se lanzó a convalidar la política económica y antisindical del nuevo gobierno. *La Nación*, que había demostrado un espíritu más matizado y flexible que su par, se transformó en un púlpito más polifónico. En contraste con la edición de los años '70, en la cual la mayoría de los análisis políticos aparecían sin firma, en los '90 diversas plumas reflexionan, con nombre propio, sobre la realidad local.

La voluntad de participar en la polémica política no ha abandonado a los intelectuales que reflexionan desde los diarios centenarios. No obstante, han dejado de ubicarse en la cúspide del pensamiento político y de lanzar proclamas de inspiración dirigente y aristocrática, para ocupar una posición más modesta de consejeros y traductores del programa que defienden. De modo simétricamente opuesto a lo planteado por Portantiero para la izquierda (1999: 274), el liberalismo de estos periódicos se ha tornado menos un compromiso ético o sentimental que una oportunidad para consolidar determinada línea política.

Si una de las características del liberalismo político ha sido poner las normas jurídicas por encima de las decisiones políticas extraordinarias, es evidente que el liberalismo argentino de los diarios tradicionales ha demostrado una sugestiva flexibilidad para esgrimir los imperativos constitucionales a la hora de contener los reclamos ajenos y violarlos cuando obedecen a intereses propios. Como muestra el repaso de las editoriales presentado en este documento, esta plasticidad no se circunscribe a un período en el cual las normas eran desdeñadas por todos los actores políticos. Aún después del retorno de-

mocrático en 1983, el liberalismo vernáculo supo respaldar en silencio la discrecionalidad menemista cuando fue empleada a favor del orden liberal.

El caso de *Criterio* es y ha sido siempre peculiar. El propio análisis de nuestro corpus revela su filiación más republicana y conservadora que liberal. Su atención al equilibrio de poderes y contrapesos, su énfasis en la integración y la moral, su preocupación por los pobres y desposeídos, introducen una interpretación más humanística y, si se quiere más sociológica, que la de los otros dos redactores.

Asimismo, la revista católica está expuesta a condicionantes distintos a los que operan sobre la prensa masiva. Por un lado, se ve menos amenazada por las transformaciones en el mercado editorial (al ser su público más acotado y sus estrategias de comercialización específicas); por el otro, está directamente ligada con la institución religiosa a la que adscribe y a partir de la cual reflexiona. La legitimidad eclesiástica, erosionada en el pasado por sus compromisos políticos, se ha visto restituida por el protagonismo desplegado por la Iglesia en la asistencia social, función en la cual el Estado no ha dado abasto. De este modo, *Criterio*, como parte de una comunidad católica que asienta su recobrada legitimidad en la defensa de los pobres y como heredera de una impronta que la lleva a ensayar una combinación más ajustada entre un liberalismo de medios y un liberalismo de fines, persistió, mucho más que sus pares, en una actitud crítica y moralizadora con respecto al gobierno.

Alertas por los errores del pasado, los intelectuales de la publicación religiosa han advertido recurrentemente la necesidad de reivindicar independencia y autonomía con respecto a los poderes públicos y de respetar la pluralidad pastoral en el interior de la institución. La imagen que erige *Criterio* de la Iglesia de fin de siglo conjuga el papel de conciencia ética y crítica y su rol como canal de intermediación y pacificación entre gobierno y desposeídos.

Las consecuencias de estas actitudes son conocidas, y lejos de perfilar una sociedad más igualitaria sirven para consolidar su carácter jerarquizado. En efecto, si al intermediar la Iglesia evita que los beneficiarios asuman las necesidades, las elaboren como intereses y las transformen en reclamos políticos, en su rol pacificador y paternalista consolida la extrema distancia social que separa al dador de la ayuda del beneficiario. *Criterio* no juzga las reglas económicas que han permitido la consolidación de una sociedad excluyente, no vincula la debilidad de los sectores populares con el deterioro de sus instancias de organización y representación. La publicación apunta en cambio su dedo acusador a una "nueva oligarquía", a una "cultura del despilfarro, la ostentación y la frivolidad" que olvida "compadecerse" de sus semejantes. En un escenario signado por la austeridad y el recato, la ejemplaridad de los gobernantes y la caridad cristiana, *Criterio* no tendría a quién inculpar con su discurso moralizante. Es indudable que la publicación religiosa se espanta del deterioro de la equidad social que ha vivido la Argentina reciente. No obstante, al tematizar la "cuestión social" como un aspecto prácticamente escindido de la economía y la política, lo reifica y, al reivindicar el papel caritativo y moralizador de la Iglesia en la problemática contribuye, de algún modo, a reproducirla.

Ahora bien, las editoriales no son sólo pretexto para examinar a los redactores e interlocutores que participan de ellas, y a los contenidos que transmiten, sino que sirven de expresión de la política misma. De Ipola y De Riz (1982) se encargaron de recuperar una fórmula desarrollada por Halperín Donghi (1980) para pensar la "ideología argentina". Ésta, compartida por los distintos protagonistas políticos locales, remitiría a dos mitos originarios: la idea de un país superdotado de riquezas naturales, predilecto de la providencia, y la idea de un país "decidible" en el plano político, capaz de ser organizado desde arriba por una voluntad lo suficientemente lúcida y audaz para hacerlo. Carente de reglas de convivencia política mínimas, incapaz de garantizar un patrón de gobernabilidad perdurable, la Argentina contemporánea compartía cierta creencia en su carácter excepcionalmente valioso. Y del mismo modo en que después de 1945 una fracción importante de la sociedad sostuvo la omnipotencia de un Perón, la otra mitad del espectro político buscó denodadamente a su propio líder. La consolidación del esquema social legado por el menemismo se asienta sobre la desintegración de esta perspectiva: la Argentina no sólo dejó de ser percibida como una sociedad extraordinariamente rica y llamada a dirigir los destinos de América del Sur, sino que asumió su historia en clave de decadencia (un triunfo evidente de la historiografía liberal) y relegó la política a la sencilla administración del aparato del estado.

De modo sintomático, *Criterio*, cuya principal preocupación es y ha sido el problema de la integración y la convivencia, dejó de centrarse en la política para adquirir, veinte años más tarde, un carácter mucho más intimista, centrado en la vida cotidiana y la moral.

Al menos en el caso de *La Nación* y *La Prensa*, las estrategias de invalidación que hemos registrado en este trabajo se repiten en ambos períodos. La condena al sindicalismo, desesperada hacia 1975 y triunfante a lo largo de los '90, apela a argumentos semejantes. La impugnación de los dirigentes gremiales a través del énfasis en sus actitudes turbias y egoístas, la condena de las estrategias confrontativas que cuestionan de modo velado la legitimidad y eficacia de estos medios para obtener beneficios materiales, la denuncia del carácter promiscuo de los vínculos entre gremios y Estado y la reafirmación de la representación político-partidaria como único canal de expresión de la voluntad popular, son algunas de las razones mencionadas. También la interpretación y neutralización de los estallidos sociales ofrecen similitudes. Por un lado, el liberalismo rechaza la violencia anteponiendo la soberanía de la ley; por el otro, el carácter episódico y desorganizado de estas manifestaciones le permiten denostar los reclamos como carentes de una alternativa viable y/o retraducir las demandas en términos que refuerzan las líneas propuestas por los "intelectuales de la libertad".

Claro que mientras los conflictos del pasado requerían un sinnúmero de editoriales y una alta intensidad emocional para conjurar las consecuencias políticas de cada manifestación contestataria (y por momentos esto era absolutamente insuficiente), en el presente alcanzan un par de comentarios desgastados que apenas remiten a sus implicaciones para el gobierno³¹.

Al mismo tiempo, el liberalismo se ha apropiado de la noción de cambio y de su temporalidad. Brune (1997) señaló que el progreso es, al mismo tiempo, una realidad y una ideología. Más allá de las transformaciones que tienen lugar en una sociedad, el cambio es con frecuencia percibido como inherentemente positivo, necesario, irreductible. La prescripción de adaptarse, de no detenerlo, de estar a la altura de las circunstancias, se encarna en un terrorismo cuyo testimonio es la generalizada angustia por el retraso y la marginación. La Revolución Francesa nos ha legado la identificación entre modernidad, progreso e innovaciones tecnológicas. Encarnando esta fusión, el liberalismo se siente autorizado hoy a determinar el carácter "retardatario", "contemporáneo" o "innovador" de las concepciones y prácticas de los distintos sujetos sociales y políticos.

De esta suerte, la realización de un ideal largamente acariciado por el liberalismo local, la desacralización de los conflictos políticos, la apolitización y desideologización de las decisiones colectivas, han atentado contra el estatuto y la riqueza de sus propias editoriales. La deseada subordinación de la economía a la política sólo admite como racional la acción que prevé y castiga las violaciones a la dinámica natural y prepolítica del mercado. La originalidad y productividad argumentativa de los discursos setentistas, la fuerte carga de violencia simbólica expresada por el desprecio, la ironía y la irreverencia de sus páginas, han dejado lugar a una prosa moderada, desinteresada por desprenderse de la coyuntura, dispuesta a repetir y esloganizar sin brillo muchos de sus valores y principios.

Como dijera un agudo intelectual conservador al reflexionar sobre la Revolución de 1789, "Quien lucha contra nosotros fortalece nuestros nervios y aguzza nuestra habilidad. Nuestro antagonista nos ayuda. El conflicto amistoso con la dificultad nos obliga a un conocimiento íntimo de nuestro objeto y nos fuerza a considerarlo en todas sus relaciones. No permite que seamos superficiales" (Burke, 1981: 186). Esta constatación no menosprecia la capacidad performativa del liberalismo conservador ni subestima su destreza para conjurar los reclamos de sus antagonistas. Mal que les pese a los intelectuales, la productividad de un discurso no radica sólo en su calidad retórica y argumentativa sino en su habilidad para engarzar ésta con las condiciones sociales, económicas y simbólicas que garanticen su corporización en prácticas y actitudes.

Para cualquier alternativa que pretenda volver a pensar la sociedad y la política, es en ese encuentro entre idea y voluntad donde radica el punto de partida.

Bibliografía

- Acuña, Carlos (1995) "La nueva matriz política argentina", en Acuña, Carlos (compilador) *La nueva matriz política argentina* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Alonso, Guillermo (1996) "La política de reforma de obras sociales argentina: un reiterado modelo de gestión estatal y de acción sindical", en *Estudios Sociológicos* (México D.F.) Vol. XIV, N° 42.
- Brune, François (1997) "Culture, ideologie et société", en *Trimestrel du Monde diplomatique, hors-série* (Paris), marzo.
- Burke, Edmund 1981 (1790) "Reflexiones sobre la revolución francesa", en *Textos políticos* (México: Fondo de Cultura Económica).
- De Ipola, Emilio y Liliana De Riz (1982) "Un juego de cartas políticas'. Intelectuales y discurso autoritario en la Argentina actual", en Camacho, Daniel et al (compiladores) *América Latina. Ideología y Cultura* (San José de Costa Rica: Ediciones FLACSO).
- Eccleshall, Robert (1993) "Liberalismo" y "Conservadurismo", en Eccleshall, Robert et al *Ideologías políticas* (Madrid: Editorial Tecnos).
- Farinetti, Marina (1998) "¿Qué queda del "movimiento obrero"? Las reformas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina" (Buenos Aires) Mimeo.
- Gerchunoff, Pablo y Juan Carlos Torre 1996 "La política de liberalización económica en la administración de Menem", en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 36, N° 143.
- Getino, Octavio (1995) *Las industrias culturales en la Argentina* (Buenos Aires: Colihue).
- Gillespie, Richard (1987) *Soldados de Perón. Los montoneros* (Buenos Aires: Grijalbo).
- Gilman, Claudia (1999) "El intelectual como problema. La eclosión del antiintelectualismo latinoamericano de los sesenta y los setenta", en *Prisma* (Quilmes) N° 3.
- Hall, Stuart (1998) "El problema de la ideología: marxismo sin garantías", en *Doxa* (Buenos Aires) N° 3.
- Halperín Donghi, Tulio (1994) *La larga agonía de la Argentina peronista* (Buenos Aires: Ariel).
- Halperín Donghi, Tulio (1987) *El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: Sudamericana).
- Halperín Donghi, Tulio (1980) *Proyecto y construcción de una nación (Argentina 1946-1880)* (Caracas: Biblioteca Ayacucho).
- Heredia, Mariana (1999) "Desigualdades sociales y desarrollo económico: una crítica al economicismo de algunos organismos multilaterales", en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 167.

- Iztcovitz, Victoria (1985) *Estilo de gobierno y crisis política (1973-1976)* (Buenos Aires: CEAL).
- James, Daniel (1990) *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976* (Buenos Aires: Sudamericana).
- Kritz, Ernesto (1999) "Para terminar con el desempleo", en *La Nación* (Buenos Aires) 25 de julio.
- Leis, Héctor (1991) *Intelectuales y política 1966-1973* (Buenos Aires: CEAL).
- Mallimaci, Fortunato (1994) "La Iglesia Argentina frente al liberalismo", en *VVAA Historia General de la Iglesia en América Latina* (Buenos Aires: CEHILA-Ediciones Sígueme).
- Marsal, Juan (1972) "La ideología de la derecha", en Marsal, Juan (compilador) *Argentina conflictiva* (Buenos Aires: Paidós).
- Montserrat, Marcelo (1999) "El orden y la libertad. Una historia intelectual de *Criterio*. 1928-1968", en Girbal-Blacha, Noemí y Quattrocchi-Woisson, Diana *Cuando opinar es actuar* (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia).
- Montserrat, Marcelo (1992) *La experiencia conservadora* (Buenos Aires: Sudamericana y Fundación Argentina).
- Monza, Alfredo (1999) "La experiencia indica que la flexibilización no crea empleo", en *La Nación* (Buenos Aires) 22 de agosto.
- Moyano, María José (1995) *Argentina's Lost Patrol. Armed Struggle, 1969-1979* (Michigan: Yale University Press).
- Murillo, María Victoria (1997) "La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem", en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires), Vol. 37, N° 147.
- O'Donnell, Guillermo (1977) "Estado y Alianzas en la Argentina, 1955-1976", en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 16, N° 64.
- Portantiero, Juan Carlos (1999) "La idea socialista", en Altamirano, Carlos (compilador) *La Argentina en el siglo XX* (Buenos Aires: Ariel).
- Portantiero, Juan Carlos (1977) "Economía y política en la crisis argentina 1955-1973" en *Revista Mexicana de Sociología* (México) N° 2.
- Portoriero, Gustavo (1991) *Sacerdotes para el Tercer Mundo* (Buenos Aires: CEAL).
- Romero, José Luis (1975) *Las ideas políticas en la Argentina* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Rouquié, Alain (1982) *Poder militar y sociedad política en la Argentina* (Buenos Aires: Emecé).

Samuelson, Paul (1971) *Review of the River Plate* (Buenos Aires) 30 de septiembre.

Sidicaro, Ricardo (1998) "Cambios en el Estado y transformaciones en el peronismo", en *Sociedad* (Buenos Aires) N° 12/13.

Sidicaro, Ricardo (1993) *La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación 1909-1989* (Buenos Aires: Editorial Sudamericana).

Sigal, Silvia y Eliseo Verón (1988) *Perón o Muerte* (Buenos Aires: Hyspamérica).

Torre, Juan Carlos (1989) *Los sindicatos en el gobierno* (Buenos Aires: CEAL).

Touraine, Alain (1987) *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina* (Santiago de Chile: PREALC-OIT).

Un Ojo Avizor en los medios 1999 (Buenos Aires) N° 9, 12 y 14.

Notas

1 Las editoriales políticas de *La Nación*, *La Prensa* y *Criterio* consultadas para la elaboración de este trabajo son las siguientes:

a) Década de 1970: mayo y junio 1969 (Cordobazo); mayo a agosto 1970 (secuestro y asesinato de Aramburu); mayo a julio 1971 (Vivorazo y otras protestas urbanas); noviembre y diciembre 1972 (visita de Perón); abril a julio 1973 (asunción de Cámpora y enfrentamientos en Ezeiza); mayo y junio 1974 (conflicto entre Perón y Montoneros); junio a agosto 1975 (Rodrigazo y conflictos sindicales subsiguientes); diciembre de 1975 (Monte Chingolo); enero a marzo 1976 (albores del golpe de Estado).

b) Década de 1990: mayo a julio 1989 (elección y asunción de Menem); noviembre y diciembre de 1992 (primer paro general de la CGT); diciembre 1993 y enero 1994 (Santiagazo); mayo a julio 1994 (Marcha Federal); mayo y junio 1995 (elecciones y reelección de Menem); junio y julio 1996 (Protestas de Cutral-Co y Plaza Huincul); agosto y septiembre 1996 (Paro de CGT, MTA y CTA); abril a junio 1997 (protestas en Neuquén); septiembre de 1997 (paro CGT); octubre a diciembre 1999 (elecciones y victoria de la Alianza).

2 Al respecto, consultar Botana en Montserrat (1992) y Halperín Donghi (1987).

3 Sobre la naturaleza compleja de la burguesía argentina, ver O'Donnell (1977), Portantiero (1977), Rouquié (1982) y Touraine (1987).

4 El diario *La Nación* ha sido objeto de un estudio cuidadoso y exhaustivo de sus editoriales desde 1909 a 1989 por parte de Sidicaro (1993). Este trabajo, que abarca sólo uno de los períodos que analizaremos, constituye un antecedente inmediato de nuestra investigación.

5 Para un análisis del contexto social y político de la creación de *Criterio* y sus posiciones iniciales, ver Mallimaci (1994) y Montserrat (1999).

6 Pueden identificarse tres procesos simultáneos: la retracción de la participación estatal en los medios de comunicación (la única excepción, el canal de TV estatal, no logró siquiera competir con los nuevos actores del campo), la concentración de la propiedad en manos de un acotado número de grupos diversificados, y la extranjerización del mercado cultural local. Sobre la profunda recomposición del mercado mediático en la Argentina reciente, consultar los artículos publicados en *Un Ojo Avizor en los medios* (1999) N° 9, 12 y 14.

7 Nos referimos a la siguiente frase: "Clausurado y confiscado el 26 de enero de 1951 por defender la libertad, reinició sus ediciones el 3 de febrero de 1956".

8 En un espacio periodístico más reducido y competitivo, *La Nación* perdió consumidores pero creció en el porcentaje del mercado bajo su control.

Como señala Getino (1995) con datos aportados por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTBA), “el número de compradores de diarios de Buenos Aires se redujo de casi 2 millones en 1970 a 1 millón en el '80 y a 1,2 millones en el '90”. Actualmente, *Clarín*, *La Nación* y *Diario Popular* son los principales oferentes en el mercado de periódicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires; los otros medios han quedado muy atrás.

9 Las universidades nacionales fueron intervenidas poco después del golpe de 1966, con notable violencia por parte de las fuerzas policiales. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), volcada a la oposición luego de su apoyo inicial, quedó desarticulada tras el fracaso del “Plan de Acción” (1967) y la intransigente legislación represiva decretada y aplicada por el gobierno desde entonces.

10 Itzcovitz (1985) se ha encargado de examinar la recomposición de los distintos grupos dentro del gobierno peronista.

11 Sobre la crisis de las distintas organizaciones radicalizadas puede consultarse: para el movimiento obrero, James (1990) y Torre (1989); para los Sacerdotes del Tercer Mundo, Portoriero (1991); para las organizaciones políticas armadas ligadas con el peronismo, Gillespie (1987) y Moyano (1995).

12 El golpe militar que destituyó al general Perón en 1955.

13 Vale aclarar aquí que todos los analistas del período coinciden en que la presencia de las organizaciones guerrilleras fue ínfima si no inexistente en el Cordobazo. Fue después de este suceso que comenzaron a formarse estructuras políticas militarizadas en la Argentina.

14 Al respecto, ver discursos de: Onganía, presidente de la Nación, emitido por radio y TV el día 4 de junio de 1969; Sánchez Lahoz, comandante del III cuerpo del Ejército, publicado en *La Nación* (1 de junio de 1969); y Carlos José Caballero, gobernador de Córdoba, publicado en el mismo medio y en la misma fecha.

15 El presidente Onganía fue reemplazado en 1970 por Levingston.

16 Entre las numerosas editoriales consagradas al tema, ver, en relación a los conflictos gremiales cordobeses, *La Nación* (9 y 19 de mayo de 1971: 8); con los estudiantes, *La Nación* (13 de marzo de 1971: 8); con la guerrilla, *La Nación* (31 de mayo de 1970: 8; 18 de julio de 1970: 8; 3 de junio de 1971: 8; y 23 de junio de 1971: 8).

17 Estas preocupaciones ya aparecían en noviembre y diciembre de 1972.

18 Prácticamente todas las editoriales del período están consagradas a comentar el desorden penitenciario, sindical, administrativo y cultural. Entre otras pueden consultarse: *La Prensa*, 5, 7 y 8 de julio de 1973: 6.

19 Como ejemplo de discursos que muestran la voluntad pacificadora del viejo caudillo después de 1973, ver los pronunciados inmediatamente des-

pués de su regreso al país y de los graves enfrentamientos de las dos alas del movimiento peronista en Ezeiza: los emitidos el 20 y 21 de junio de 1973 por radio y TV, y el pronunciado como cierre de la campaña electoral el 21 de septiembre de 1973. El endurecimiento del líder hacia la juventud radicalizada comenzará desde su retorno al gobierno y alcanzará su punto más álgido el 1° de mayo de 1974. Para un análisis exhaustivo de los intercambios discursivos entre Perón y la juventud durante este período, ver Sigal y Verón (1988).

20 Al respecto, son especialmente interesantes los aportes de Gilman (1999) y Leis (1991).

21 Nos referimos a las medidas implementadas por el ministro de Economía Celestino Rodrigo. Se produjo una devaluación del peso del 100%, un aumento del combustible y las tarifas públicas mayor aún, y una postergación indeterminada de la firma de los convenios salariales.

22 Alsogaray, Alvaro: “¡Ciertamente estamos en una encrucijada!”, en *La Prensa* (15 de julio de 1975: 4 y 5).

23 Entre las organizaciones pueden mencionarse “Acción Patriótica Argentina”, “Movimiento Unificador del Centro” y “Liga Pro Comportamiento Humano”. La cita corresponde a la primera entidad y fue publicada en *La Prensa* (5 de diciembre de 1975).

24 El intento de copamiento del Batallón de Depósito de Arsenales 601, en las inmediaciones de Monte Chingolo, fue por sus características generales (sincronización, cantidad de efectivos y armamentos, espacio de operaciones y objetivos) una de las acciones armadas de mayor magnitud en la historia del país. Estuvo protagonizada por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y tuvo lugar en diciembre de 1975.

25 La responsabilidad asignada al peronismo y la importancia secundaria otorgada a la guerrilla es evidente en los comunicados iniciales de quienes comandaron el Proceso de Reorganización Nacional. Examinar la proclama de asunción del 24 de marzo de 1976 y el mensaje del teniente general Videla del 29 de marzo de 1976.

26 Nos referimos a la organización paramilitar llamada Alianza Anticomunista Argentina (AAA) que, con el apoyo de un sector del gobierno peronista, inició la persecución y asesinato de quienes eran considerados subversivos o potenciales opositores del régimen.

27 En relación con el apoyo brindado por las entidades agropecuarias puede mencionarse la larga ovación que prestó al presidente Menem la Sociedad Rural Argentina en la inauguración de su exposición anual en Palermo (12 de agosto de 1989), y el apoyo demostrado por los empresarios en el “Día de la Industria” (2 de septiembre de 1989). El respaldo a la línea económica emprendida por el gobierno fue ratificado por estas entidades y los organismos internacionales de crédito en reiteradas oportunidades. Al respecto, consultar Acuña (1995).

28 Me permito remitir al lector a mi artículo sobre los diagnósticos y propuestas de los organismos internacionales en torno de la cuestión social en América Latina, Heredia (1999).

29 Como ejemplo paradigmático de este tipo de ejercicio, *Criterio* (26 de mayo de 1994: 215-218; 27 de junio de 1996, 289-291; y 12 de junio de 1997: 219-221).

30 De la Rúa es un político ligado con el ala más tradicional y conservadora de la Unión Cívica Radical, cuya figura resurgió a mediados de los años noventa hasta ser proclamado candidato a la presidencia en 1998.

31 El volumen de las editoriales analizadas para cada período constituye de por sí un dato significativo. A pesar de que la cantidad de hechos escogidos fue la misma, los comentarios consagrados a los sucesos estudiados en los años '70 (367) casi quintuplica las editoriales dedicadas a los acontecimientos analizados en los '90 (76). Del mismo modo, mientras en los años '70 los acontecimientos escogidos eran retomados semanas más tarde en relación a otros sucesos o como excusa para formular nuevas sugerencias a los gobernantes o actores sociales del período, los comentarios en torno de las protestas y reclamos de los '90 parecen cerrarse en sí mismos. Con excepción del *racconto* que antecede al análisis de cada nuevo paro o estallido provincial, las referencias a conflictos pasados es más bien excepcional.